AL RESCATE DE UNA DEMOCRACIA PERPLEJA Y DESNORTEADA

LAS ORFANDADES E INSOLVENCIAS DE NUESTRAS PRÁCTICAS DEMOCRÁTICAS Y DE SUS MARCOS CONCEPTUALES

-INTRODUCCIÓN: DOS ABORDAJES COMPLEMENTARIOS.

En los más diversos contextos, aún en aquellos en los que las instituciones democráticas habían acumulado arraigos robustos y sólidos respaldos ciudadanos, en particular, en términos de discernimientos, lealtades y disposiciones de fraternidad cívica, esas mismas instituciones y las prácticas asociadas a ellas han empezado a exhibir síntomas inequívocos de agotamiento, impotencia y desencanto, como si a lo largo de las últimas tres décadas se hubieran estado deslizando por una pendiente de desgastes y desvirtuaciones.

Para intentar dar cuenta de tal pendiente, considero conveniente descartar todas aquellas reconstrucciones basadas en condicionantes exógenos y optar, en cambio, por dos abordajes endógenos, complementarios entre sí, cuyos ejes temáticos paso a esbozar a continuación.

El primero de ellos –al que me propongo titular “*Al rescate de una democracia a la defensiva y desencantada*”– se apoya en una cuidadosa explicitación de aquellos compromisos normativos que respaldan la mejor versión concebible de los experimentos democráticos en su mejor versión y les proporcionan la inspiración y la capacidad para sustraer los destinos colectivos e individuales involucrados a los encadenamientos meramente inerciales y a la lógica de los hechos, con sus componentes azarosos, es decir, a todos aquellos factores a los que Alexander Hamilton englobaba bajo el rótulo común “*force and accident*” (The Federalist Papers, N° 1). A partir de ese repertorio de compromisos, nos proponemos un doble objetivo. Por un lado, se trata de **identificar los flancos vulnerables de los experimentos democráticos**, todas aquellas pendientes que conducen al enervamiento de esas tensiones normativas específicas y que terminan a la larga condenándolos, a través de una secuencia de concesiones y renuncios, a quedar sometidos al imperio, o bien de las correlaciones de fuerzas, de los arreglos meramente circunstanciales y efímeros (*modus vivendi*), o bien a los designios y a las opciones elaboradas por expertos en base a consideraciones de una racionalidad meramente instrumental, en las que resultan relegados y soslayados los testimonios y los elementos de juicio profanos de los miembros del nosotros ciudadano. Por otro lado, se trata de determinar el tipo específico de recursos ciudadanos que es preciso cultivar para asegurar la salud y el vigor de los experimentos democráticos, a la vez que indicar el tipo de eslabonamientos intertemporales alternativos con los que los experimentos democráticos vigorosos pueden proyectarse hacia futuros inéditos y apasionantes a partir de revisiones sucesivas de sus propios pasados.

El segundo de ellos, en cambio –“*Al rescate de una democracia perpleja y a la deriva*” apunta a rescatar las raíces plebeyas de las que surgieron y se siguen nutriendo los ideales y los experimentos democráticos, a la vez que hacerse cargo de las deficiencias que derivan de esos arraigos cívicos milenarios, tan humildes como robustos. A tales efectos, se propone analizar todos **aquellos problemas conceptuales y criterios pendientes**, a los que las tradiciones democráticas más decantadas no han acertado todavía a ofrecer, ya no sólo esbozos de formulaciones pertinentes, sino tampoco respuestas y orientaciones prácticas mínimamente apropiadas. Se supone que tal recorrido indagatorio nos permite disponer elementos de juicio suficientes como para concluir –no sin alarma– que a) **el acervo acumulado de libretos profanos y de elaboraciones teóricas asociado a los experimentos democráticos en sus mejores versiones ha venido arrastrando desde el principio un repertorio amplio de aporías y de insolencias teóricas y que b) ese mismo acervo ha estado sobreviviendo a su propia “bancarrotta”**, en particular, a su incapacidad de formular en forma apropiada cómo deben cumplirse compromisos normativos que orientan a las prácticas e instituciones democráticas y cómo pueden asegurarse y en qué instancias se reclutan aquellos músculos ciudadanos requeridos para conjugarlas en forma saneada y rendidora.

El presente escrito está dedicado al segundo de los dos abordajes complementarios y el mismo se ajusta al siguiente itinerario expositivo. En la primera parte se echa una mirada introductoria a los principales ejes de aporías y de insolencias, tratando de demostrar que se trata de verdaderas asignaturas pendientes, es decir, temas con respecto a los cuales la teoría y las prácticas democráticas han venido incurriendo en despistes sistemáticos. En la segunda parte, esbozamos algunas respuestas tentativas a algunos de esos desafíos y trazamos algunas de las opciones alternativas –tanto en lo referente a los diseños institucionales, como a los

convocatorias y justificaciones morales y cívicas apelables- que podrían reemplazar ventajosamente las tradicionalmente frecuentadas.

PRIMERA PARTE: UNA MIRADA INICIAL AL REPERTORIO DE LAS APORÍAS, LAS INSOLVENCIAS Y LAS ASIGNATURAS PENDIENTES QUE LAS INSTITUCIONES Y PRÁCTICAS DEMOCRÁTICAS DEBEN ENFRENTAR.

-1. La articulación problemática entre la deliberación y el voto.

-1.1. Las tradiciones y los antecedentes que respaldan el lugar relevante de la deliberación y del voto como procedimientos e instancias democráticas.

Tanto desde el punto de vista procedimental, como de las tradiciones discursivas que las respaldan y las enmarcan, la deliberación y el voto figuran como las dos instancias decisivas en la configuración y legitimación de los fallos democráticos, a la vez que como las dos exigencias cuyo cumplimiento contribuye decisivamente a configurar la autoridad específica que dichos fallos revisten.

-i) En el marco de la tradición democrática, **la instancia del voto** ubica a **la voluntad de los ciudadanos**, sus pronunciamientos, como **la sede última de la soberanía** y asocia a las instituciones democráticas con el principio normativo del autogobierno. En ese sentido, el voto o más bien la consulta a los ciudadanos y a sus representantes convoca a los gobernados y los autoriza a ejercer la capacidad de “CHOICE”, es decir, de determinar el rumbo de su destino colectivo y de asumir opciones responsables acerca de los cursos futuros de acontecimientos y del tipo de anudamientos que allí deben gravitar. Así, por ejemplo, en el marco de las tradiciones contractualistas, el consenso de los gobernados figura como condición de legitimación de las instancias que pretenden ejercer autoridad sobre ellos. En términos más estrictamente kantianos, los ciudadanos en cuanto agentes morales que revisten la condición de fines de sí mismos son los únicos que están autorizados a fijarse sus propios fines y, por lo tanto, en cuanto autolegisladores, no pueden estar sometidos más que a leyes que ellos mismos han contribuido a elaborar o a las que han otorgado validez y prestado consenso.

En ese sentido, pues, la instancia del voto como componente de las prácticas democráticas reconoce a los ciudadanos como agentes libres e iguales en dignidad, a la vez que los convoca a configurarse y a reconocerse recíprocamente como seres capaces de orientarse autónomamente, de asumir opciones deliberadas por aquellas clases de cosas o de actividades que tornan valiosa a sus propias vidas. En términos negativos, dicha convocatoria los autoriza y los alienta a rechazar la condición de agentes sometidos a leyes -o a meras decisiones- en cuya determinación no fueron consultados ni han tenido oportunidades equitativas de incidir sobre sus contenidos.

-ii) En el marco de esa misma tradición, **la instancia de la deliberación**, contribuye a especificar la condición y los términos a partir de los cuales los ciudadanos somos convocados legítimamente a pronunciarnos: no en cuanto meros titulares de preferencias acerca de nuestras circunstancias y peripecias personales, si no **en cuanto testigos irremplazables e intérpretes autorizados del interés público y a propósito de los asuntos compartidos**. Sólo así, a través de nuestro involucramiento en instancias debidamente acondicionadas de deliberación, en las que participamos en intercambios públicos de **testimonios y consideraciones en torno a los temas de la agenda sobre los que las autoridades democráticas pueden hacer recaer fallos legitimados**, -y respaldados por el monopolio sobre los recursos de coerción- es que resultamos habilitados a configurarnos como miembros de un “nosotros ciudadano”, de una unidad de destinos compartidos. La contrapartida de esa habilitación es el compromiso asumido de estar dispuestos, no sólo a ejercer nuestra capacidad de REFLECTION, es decir, de construir nuestro futuro en términos de un conjunto inagotable de opciones que admiten ser sopesadas reflexivamente, sino también a hacernos cargo de nuestras discrepancias internas, de las perplejidades compartibles, las desconfianzas y temores recíprocos, etc.

Así, pues, la instancia deliberativa apela a nuestra vocación a constituirnos y reivindicarnos como agentes morales capaces de determinarnos, ya no por meros caprichos o inclinaciones circunstanciales, sino en base a principios y consideraciones públicamente defendibles, a la que vez que nos compromete a estar dispuestos a

revisar nuestras creencias y orientaciones a partir de los elementos de juicio aportados por los restantes miembros de nuestra comunidad de destino, es decir, a otorgarnos audiencia y convencernos recíprocamente.

-1.2. Desautorizaciones y distorsiones recíprocas entre “reflection” y “choice”.

Y bien, ni apelando a la acumulación de discernimientos y disposiciones prácticas, ni al acervo de elaboraciones reflexivas, disponemos de una formulación satisfactoria que nos permita articular rendidoramente ambas instancias. En realidad, la situación es mucho peor, por cuanto **no parece haber forma alguna de combinar ambas instancias que no termine redundando en su mutua desautorización.**

-i) Por un lado, los agentes que participan en una instancia de deliberaciones compartidas acerca de los asuntos sobre los que es preciso adoptar un fallo institucionalmente autorizado, no pueden dejar de lado que en último término, y en la medida en que subsistan discrepancias en cuanto al rumbo a adoptar, no sólo será preciso, si no que además resulta legitimado democráticamente, apelar al recuento de las voluntades alineadas en torno a las propuestas desplegadas y, más decisivamente, aceptar como válido el resultado de tal recuento. De esa manera, el recurso a la instancia del voto opera como un condicionante y como una amenaza que limita y distorsiona la instancia deliberativa. En efecto, en la medida en que los deliberantes anticipan esa instancia del voto, resulta muy difícil de evitar que el intercambio de elementos de juicio termine “contaminado” por consideraciones estratégicas. Así, por ejemplo, en el marco de esa pendiente de deslizamientos y distorsiones consecuencialistas, los participantes en la instancia deliberativa estarán inevitablemente “tentados” –tendrán los incentivos apropiados- a reservarse algunos de los argumentos y testimonios que ellos mismos consideran esclarecedores y pertinentes a los efectos de dirimir el asunto en debate, a no exponer si no aquellos elementos de juicio que no arriesgan suscitar resistencias entre los que ya están dispuestos a prestar su apoyo, a alinear su voluntad en el mismo rumbo. A la inversa, esos mismos deliberantes resultarán igualmente “tentados” a recurrir a argumentos y consideraciones que ellos mismos consideran ajenos al asunto en debate o simplemente carentes de fundamento y relevancia, pero que, sin embargo, tienen la virtud de inclinar a algunos de los convocados a fallar a inclinarse a prestar su voto.

A su vez, en la medida en que quienes participan en las instancias deliberativas son mandatarios que deben alinear sus votos a los compromisos asumidos ante los ciudadanos mandantes en el marco de las campañas electorales, en las que solicitaron su respaldo para llevar adelante determinadas orientaciones y no otras, marcar ciertas prioridades y acentos que establecen diferencias con respecto a las restantes plataformas desplegadas, en esa misma medida, sus pronunciamientos y votos en los procesos de deliberación y negociación de las leyes están condicionados de antemano por dichos compromisos frente a sus votantes, por las lealtades a las pertenencias y tradiciones partidarias. En ese marco, los intercambios deliberativos corren el riesgo de convertirse en instancias meramente *pro forma*, en torneos retóricos, en los que resultaría muy poco probable que los intercambios de elementos de juicio cambien el resultado de la consulta final, en los que, por lo tanto, sólo se argumenta, o bien para distinguirse por méritos oratorios entre los ya convencidos, o bien para proporcionar excusas y coberturas a los ya dispuestos a cambiar sus lealtades partidarias y a declinar sus compromisos previamente asumidos.

-ii) Por otro lado, el recurso a la instancia deliberativa compromete y pone en peligro la autoridad de la instancia del voto. En efecto, al convocar e incluso obligar a los mandatarios votantes a especificar las razones que justifican su apoyo o rechazo de algunas de las distintas propuestas, la instancia deliberativa termina casi siempre demostrando que existen más afinidades y convergencias entre quienes votan distinto que entre quienes votan igual. En casos extremos, cabe afirmar que la propia propuesta termina cambiando completamente su orientación y las consecuencias de su aplicación, cuando está respalda por argumentaciones muy diferentes entre sí, en base a principios y consideraciones dispares. En tales casos, el alineamiento de voluntades en la instancia del voto, esconde abismos de discrepancias en torno a los asuntos en debate, lo que amenaza a tornar inconsistente la aplicación del fallo y a dificultar la colaboración leal con su vigencia más plena, tanto por parte de los funcionarios específicamente encargados, como de los ciudadanos en general.

-2. La articulación problemática entre los elementos de juicio profanos y los expertos.

-2.1. La tensión inevitable entre la igualdad política y las diferencias abismales de versación entre los miembros del nosotros ciudadano.

A partir de sus compromisos normativos más básicos, las instituciones y prácticas democráticas terminan atrapadas en lo que a primera vista parece un dilema irresoluble. Por un lado, están obligadas a respetar el principio de *isegoría*, para lo cual deben elaborar y sancionar sus fallos otorgando a cada uno de sus ciudadanos las mismas oportunidades de incidir en la determinación de sus contenidos. Por otro lado, no es posible ocultar que en relación con los distintos asuntos de la agenda pública, los ciudadanos no sólo poseen niveles muy desiguales de información, de versación cultivada y madurada en forma disciplinada, si no que, además, tales diferencias son expresamente reconocidas y tenidas en cuenta, de modo que la opinión y los elementos de juicio que aportan los “públicamente reconocidos como más versados o autorizados” reciben mayores audiencias, son objeto de consultas y terminan gravitando en mayor medida.

Y bien, una democracia sana y vigorosa, ¿debería renunciar a esas prácticas “diferenciadoras” para no incurrir en violaciones abiertas a sus compromisos con la igualdad política? Y suponiendo que estuviera dispuesta a tal renuncia, ¿no sería necesario eliminar de plano cualquier instancia de deliberación, toda vez que en ese tipo de instancias resulta inevitable que los más versados terminen influyendo sobre los menos versados?

En todo caso, ¿qué tipo de comunidad ciudadana sería aquella en la cual deberíamos privarnos de las mejores y más sedimentadas acumulaciones de elementos de juicio, en la que ninguno de sus miembros pudiera aspirar a aportar a los demás aquellas informaciones especializadas y testimonios diferenciales que nuestra peculiar trayectoria personal nos ha permitido cosechar, aunque más no sea por el simple hecho de haber tenido que asumir ciertas constelaciones particulares o extremas de circunstancias, por haber participado y sido testigo de acontecimientos que otros sólo conocen de oídas? En ese sentido, sería preciso reconocer que cada ciudadano profano es experto en alguna cosa, aunque sea en términos de experiencias, realidades y situaciones sociales que sólo él conoce íntimamente y que, por lo tanto, es portador de una acumulación idiosincrática e irremplazable de testimonios, involucramientos y exploraciones diferenciales.

-2.2. La creciente gravitación de los elementos de juicio expertos en la determinación de los contenidos del interés público.

A todo esto, corresponde añadir que a lo largo del siglo XX, la ampliación de los asuntos y los compromisos asumidos por las instituciones políticas ha estado asociado con el recurso creciente a componentes de información y de conocimientos especializados, en cuanto insumos imprescindibles para enfrentar los desafíos que plantean los nuevos tipos de actividades desarrolladas por las sociedades contemporáneas, las escalas y la complejidad de los intercambios comerciales y financieras, los impactos irreversibles sobre el entorno y las condiciones de vida en el futuro, etc.

Tanto las agencias estatales tradicionales, como en las nuevas agencias implementadas en las últimas décadas se han visto obligadas, no sólo a reclutar cada vez más elencos expertos de analistas, gerentes con entrenamiento profesional, tecnoburócratas especializados en determinadas áreas, etc., sino también a otorgarles a tales elencos una gravitación mayor en la elaboración y implementación de las directivas políticas más decisivas en los largos plazos. Al mismo tiempo, al lado de las instancias tradicionales en las que el ejercicio de la autoridad democrática está directamente legitimado por el respaldo y la confianza ciudadanas otorgados a los titulares de los mandatos institucionales, fue necesario ir agregando un nuevo tipo de instancias, las agencias reguladoras especializadas, cuya autoridad se basa en mandatos indirectos, fundamentados en la idoneidad profesional en determinada área de sus titulares. Y con el agregado de que a dichas agencias reguladoras se les otorga un amplio margen de autonomía con respecto a las instancias tradicionales de ejercicio de la autoridad ciudadana.

-2.3. Las deficiencias irreparables del modelo tradicional de división del trabajo entre los elementos de juicio expertos y profanos.

Como es obvio, tal incorporación masiva de insumos expertos e instancias de acumulación de conocimientos y capacidad entrenada de análisis y gestión profesional en la elaboración y la implementación de las políticas de las sociedades democráticas contemporáneas, plantea un desafío frente al cual fracasan irremediamente las formulaciones tradicionales y los modelos de justificación disponibles. En efecto, ¿cómo reconciliar esa

gravitación creciente de los elementos de juicio experto en la determinación del contenido de los fallos con los compromisos asumidos por las instituciones democráticas de legitimar el ejercicio de la autoridad compartida en base a los pronunciamientos de los ciudadanos y de reconocer el mismo peso y valor moral al juicio de cada uno de ellos, al margen de sus niveles diferenciales de formación intelectual o de su versación mayor o menor en determinadas áreas?

A principio se pensó que ese desafío podía ser resuelto mediante **una “división del trabajo” convencional**, según la cual, mientras **las instancias en las que prevalecen los elementos de juicio profano, los mandatos ciudadanos, asumen la responsabilidad de fijar los objetivos de las políticas**, en cambio, **las instancias especializadas en la acumulación de elementos de juicio experto se encargan de seleccionar los medios más adecuados y eficientes para alcanzar los objetivos en cuestión**. Con todo, ese modelo de división del trabajo hace agua por todos lados y, en particular, ofrece la más empobrecida versión imaginable de las contribuciones que pueden ofrecer ambos polos. En efecto, el modelo en cuestión reduce al polo profano a un conjunto de meros alineamientos de respaldos o expresiones de adhesión hacia determinadas metas, a la vez que condena al polo experto a operar como un mero instrumento ciego al servicio de objetivos a los que no puede cuestionar ni reformular. Así, pues, mientras que la reflexión teórica y las prácticas asociadas a los experimentos democráticos no logren elaborar un modelo alternativo de división del trabajo entre los aportes profanos y los expertos, dichos experimentos terminarán desembocando en los mismos callejones sin salida, en la misma incapacidad para acoger rendidoramente y tornar complementarios a ambos tipos de aportes.

En resumen, el problema de la articulación más apropiada de los elementos de juicio profanos y expertos se ha ido agravando y complejizando, a partir de las siguientes circunstancias:

- i) La crisis irreversible del modelo clásico de racionalidad instrumental y sus deficiencias para dar cuenta del lugar y el aporte específico de los conocimientos y las herramientas de análisis de los especialistas y los expertos en el procesamiento de los problemas de la agenda pública;
- ii) la pendiente de vaciamiento de la agenda pública de dilemas y discrepancias morales genuinas, así como el progresivo entronizamiento de ciertos objetivos supuestamente neutralizados, en torno a los cuales se reunirían consensos amplios (crecimiento, desarrollo, bienestar, etc.);
- iii) la gravitación creciente de las instancias expertas en el diseño de las políticas, en la formulación de las alternativas disponibles y en la gestión de las agencias reguladoras con autonomías ampliadas en áreas cada vez más decisivas y especializadas, tales como la monetaria y financiera, la energía, el medio ambiente, comunicaciones, etc.;
- iv) como consecuencia inevitable de lo anterior: la ausencia de relatos y consideraciones profanas en el manejo de la cosa pública y la impotencia y extrañamiento del profano, convertido en un quejoso irresponsable, sin memoria ni discernimiento (como en el caso de los indignados).

-3. La articulación problemática entre intereses compartidos e intereses y exploraciones diferenciales.

-3.1. Las versiones tradicionales en torno a la articulación entre el interés público y los intereses diferenciales.

En principio, en la versión clásica del gobierno democrático, el ejercicio de la autoridad compartida se justifica y se orienta en la preservación y promoción de los intereses generales y permanentes, comunes o compartidos por todos los ciudadanos. En términos negativos, la autoridad democrática no puede ser ejercida legítimamente cuando dicho ejercicio contiene sesgos sectoriales y discriminatorios, cuando, por ejemplo, favorece a determinados sectores en perjuicio de otros.

Sin embargo, esa apelación a los intereses comunes da lugar a discrepancias que no admiten soluciones triviales. Así, en la versión jacobina, el compromiso normativo con los intereses comunes es interpretado y conjugado como una directiva que obliga a sospechar, cuando no a descalificar los reclamos y reivindicaciones asociados a los intereses diferenciales o sectoriales, considerados como incompatibles con los intereses generales; cualquier contagio o contaminación con los intereses sectoriales o particulares constituye una condición inhabilitante. En cambio, en la versión pluralista o polifónica de la autoridad democrática, se considera sano y legítimo que se expresen públicamente la pluralidad y diversidad de los intereses, ligados a las exploraciones e involucramientos diferenciales de los ciudadanos. Sólo así, exponiéndolos a explicitaciones y contrastaciones públicas, es posible sanear dichos intereses, evitar que terminen confinados a sus modalidades más mezquinas y rapaces, que se introduzcan de contrabando y sin ser sometidos a filtros ciudadanos compartidos.

En todo caso, Ambas versiones tradicionales, polarmente enfrentadas, incurren en deficiencias insubsanables. En cuanto a la versión jacobina, la misma sólo puede reclutar testimonios filtrados de una casta de militantes del interés público, presuntamente incontaminados, ajenos a las exploraciones diferenciales y al repertorio diversificado de tradiciones morales, religiosas, educativas, etc. Como contrapartida, tales agentes saneados adquieren un arma terriblemente peligrosa de descalificación que los habilita a desautorizar a los testimonios de los ciudadanos comunes y corrientes sobre la base de su supuesta contaminación por intereses sectoriales o por estar sesgados por involucramientos y afiliaciones diferenciales a comunidades de origen, de creencias y convicciones, etc. Las opiniones y las experiencias del ciudadano común están ligadas inevitablemente a aquellos asuntos y situaciones en los que están directamente involucrados: sus testimonios cuentan precisamente por que aportan elementos de juicio irremplazables acerca de las situaciones y actividades con las que está familiarizado: el tipo de trabajo que realiza, los asuntos y las personas de cuyo destino es responsable. Al descalificar el testimonio del ciudadano profano involucrado en actividades sectoriales y con intereses y compromisos diferenciales, los fallos de las instituciones democráticas no pueden ser contrastados a partir de los testimonios de los ciudadanos que los deben acatar y asumir sus restricciones y sus autorizaciones y, por lo tanto, también sus implicaciones y consecuencias prácticas. Se elimina, pues, una fuente de información irremplazable para calibrar los rendimientos de los fallos institucionales, su capacidad para promover o frustrar las disposiciones responsables y las iniciativas de los ciudadanos, así como para suministrar condiciones propicias o hostiles al desarrollo de las distintas actividades, talentos, autoestima y confianzas recíprocas, etc. que se requieren para formar una familia, criar hijos, administrar los bienes y los destinos entregados a su cuidado, retransmitir el acervo de conocimientos, destrezas, tradiciones y relatos acumulados por sus mayores, etc.

Por su parte, la versión “pluralista” de la articulación entre los intereses generales o básicos y los diferenciales, sufre de la deficiencia opuesta. En efecto, resulta incapaz de establecer prioridades y, por lo mismo, ubica en un mismo plano de autoridad a los más diversos intereses e involucramientos, por lo que el cuidado de los intereses compartidos por parte de la autoridad ciudadana termina desprovisto de unidad criterial y de consistencia intertemporal y, por lo mismo, expuesto a oscilamientos erráticos entre ordenamientos meramente puntuales que responden a urgencias coyunturales.

-3.2. Dos tipos de intereses diferenciales y de articulaciones problemáticas.

En términos estrictos, los problemas de articulación entre los intereses compartidos y los intereses diferenciales abarcan dos tipos distintos de confrontaciones polarizadas.

-i) Aquellas confrontaciones y tensiones inevitables que se dan entre **los intereses compartidos** -en términos de Ian Shapiro, los “*basic interest*”- por un lado y, por el otro, **los compromisos específicos y los intereses asociados a actividades diferenciales** tales como, por ejemplo, plantar trigo, elaborar vino, fabricar heladeras, producir leche, etc.;

-ii) Aquellas otras confrontaciones que se dan **en torno a la mejor forma de promover y proteger cada uno de nuestros intereses compartidos**, “*basic interest*”, tales como la crianza, la formación moral e intelectual de los niños para que se conviertan en agentes morales autorizados y ciudadanos responsables y confiables, el preservación de la salud corporal y mental, las relaciones entre los géneros y entre parejas de igual o distinto sexo, etc. En este caso, a pesar de que todos estamos de alguna manera involucrados en la defensa de tales intereses, nos vemos obligados a reconocer los márgenes legítimos para el despliegue de distintas orientaciones, de propuestas interpretativas y prácticas, con sus respectivas acumulaciones de tradiciones y relatos. En la medida en que, con ajuste a lo señalado en el numeral 1, la comunidad ciudadana reconoce a cada uno de sus miembros la autoridad y la capacidad para asumir sus propias opciones con respecto a cómo otorgar valor a su vida y cómo sacar el mejor partido de sus talentos y disposiciones, dicha comunidad debe estar dispuesta a indagar las maneras más apropiadas de **articular el despliegue y el cultivo de esas propuestas diferenciales – en términos de Shapiro, los “*best interest*”- por un lado y, por el otro, el establecimiento de aquellas condiciones que aseguran a todos el mismo paquete básico de protección de sus “*basic interest*”.**

-3.3. La articulación entre los intereses generales y los sectoriales.

De acuerdo a la sabiduría convencional y a las convocatorias públicas más frecuentadas la cuestión de cómo deben articularse los intereses generales y los sectoriales, lejos de dar lugar a problemas, equívocos o

controversias, admite una respuesta trivial: el ejercicio de la autoridad democráticamente justificada debe otorgar prioridad a los primeros sobre los segundos. En ese mismo marco, tal prioridad sería el corolario de los compromisos normativos asumidos por los experimentos democráticos, en particular con el principio de isonomía o de *equal concern* (en los términos que figuran en “The Federalist Papers”). En efecto, mientras que todos los miembros del nosotros ciudadano estamos involucrados en igual medida en la promoción y defensa de los intereses generales, los intereses sectoriales involucran en forma diferencial a distintos grupos de ciudadanos. Con todo, alcanza con una revisión mínimamente cuidadosa sobre los alcances y la aplicabilidad de esa prioridad presuntamente improblemática, para concluir que la articulación en cuestión, no sólo da lugar a un cúmulo de opacidades, sino que, además, se presta a interpretaciones divergentes.

-i) Por lo pronto, la directiva prioritarista se enfrenta a una primera dificultad: mientras que la identificación de los intereses sectoriales no parece plantear problemas de identificación, no ocurre lo mismo con los intereses generales. En efecto, los intereses sectores son directamente reivindicados por aquellos núcleos de ciudadanos que se distinguen de los demás, o bien por estar involucrados en actividades diferenciales, o bien por compartir condiciones específicas –por ejemplo, ahorristas, inquilinos, etc.- que los tornan más vulnerables ante determinadas ocurrencias y cursos de acontecimientos. En cambio, al invocar los intereses generales, no sólo no disponemos de un listado de rubros en los que todos los ciudadanos estaríamos igualmente involucrados, sino que, tampoco estamos en condiciones de perfilar cómo sería esa perspectiva sinóptica que abarcaría sin distinciones, más allá de la diversidad de nuestros destinos y protagonismos.

-ii) En segundo lugar, aún suponiendo que dispusiéramos de una identificación inequívoca de los intereses generales en base a una interpretación consistente de sus alcances, ¿cómo debemos entender y aplicar su prioridad con respecto a los sectoriales? En particular, si se diera el caso de que dicha interpretación promoviera una constelación de condiciones sistemáticamente desfavorables para el desarrollo de determinadas exploraciones diferenciales, es decir, de actividades e iniciativas artísticas, científicas, productivas, religiosas, etc., ¿no se justificaría la exigencia de revisar tal interpretación a la luz de esas derivaciones? Y si la respuesta fuera afirmativa, entonces, estaríamos enfrentados a una desautorización insoslayable de la formulación inicialmente asumida de la articulación prioritaria.

-iii) En tercer lugar, las formulaciones convencionales acerca de la articulación entre los intereses generales y sectoriales no ofrecen recursos conceptuales para dirimir las controversias sustanciadas en torno a los márgenes disponibles para las políticas sectoriales –o políticas de “fomento” sectoriales- y a su legitimidad en el marco del ejercicio de una autoridad ciudadana comprometida con los principios normativos de la democracia. En particular, me refiero a las controversias entre posiciones polarmente enfrentadas a este respecto, entre quienes

-a) justifican que las instancias ciudadanas resulten habilitadas a elaborar y aplicar políticas sectoriales, es decir, a asumir opciones selectivas entre los distintos sectores y otorgarles tratamientos y condiciones diferenciales para favorecer o obstaculizar, acelerar o desacelerar su desarrollo;

-b) consideran a los tratamientos diferenciales asociados a las políticas sectoriales como incompatibles con los compromisos normativos con el principio de isonomía, entendido como equivalente al *equal concern*, por lo que sólo habilitan a las instancias ciudadanas a aplicar aquellas políticas “horizontales” de fomento que suministran condiciones favorables para todos los sectores en forma indiscriminada o, en todo caso, a aplicar en forma transitoria políticas diferenciales que pueden justificarse en términos de compensaciones de asimetrías arraigadas en las acumulaciones y ventanas de oportunidades diferenciales que han favorecido o obstaculizado el desarrollo de los distintos sectores, o en términos de equiparaciones de las dificultades que deben superar los sectores que carecen de antecedentes y que, por lo tanto, no acceden a lo que en la jerga de los expertos se denomina como “economías de ambiente”.

-iv) En cuarto lugar, algunas de las formulaciones convencionales que respaldan a la adopción de políticas sectoriales “proactivas” y de tratamientos abiertamente discriminatorios a los distintos tipos de actividades e iniciativas productivas, añaden nuevos frentes de colisión con principios democráticos insoslayables en aquellos casos en los que **no sólo autorizan al nosotros ciudadano a seleccionar sectores “ganadores” y sectores “perdedores”, si no que, además, justifican esas opciones y la atribución de incumbencias legítimas a dicho nosotros ciudadano en ese tipo de asuntos, en base a un supuesto compromiso de dichas instancias con la maximización de la eficiencia en la asignación de los recursos y, por lo tanto, en los niveles resultantes de riquezas e ingresos.**

Por cierto, este tipo de formulaciones se ubican en uno de los extremos del espectro de respuestas posibles a la cuestión de cómo deben articularse los intereses generales y los sectoriales, pero el hecho de que su utilización frecuente no dispare un coro de denuncias y ni motive respuestas indignadas entre quienes se supone que está

comprometidos con los libretos e ideales democráticos, constituye un síntoma inequívoco de las insolvencias que afectan a dichos libretos. Por un lado, resulta preocupante el que tales formulaciones incurran en una **confusión tan inexcusable como peligrosa entre una comunidad ciudadana y una asociación de índole meramente empresarial**, ignorando las advertencias que lanzó Aristóteles hace más de dos mil años. En efecto, mientras que en el caso de éstas últimas el involucramiento de sus miembros se basa exclusivamente en sus adhesiones facultativas a los objetivos y regulaciones previamente establecidos de la asociación y en los intereses compartidos en los beneficios esperados como resultado de la gestión eficiente de dichos objetivos, en cambio, en el caso de las comunidades ciudadanas los miembros deben estar dispuestos a involucrarse en una unidad de destinos y de responsabilidades compartidas, cuyos objetivos y principios reguladores son continuamente reelaborados y contrastados a la luz de los aportes de los propios miembros en cuanto testigos profanos irremplazables de los tipos de respaldos y de confianzas que en su seno es posible anudar. Por otro lado, dicha confusión abre el camino para que los asuntos de interés público sean procesados y dilucidados en términos de una racionalidad meramente instrumental, desplazando así las instancias propiamente democráticas como fuentes de autoridad de los fallos institucionales acerca de dichos asuntos. Y como es obvio, tal desplazamiento, en la medida en que consolida configura una amenaza sistemática sobre la salud y el vigor de los experimentos democráticos. Si bien este punto ameritaría un tratamiento más detallado, aquí nos limitaremos a los anteriores señalamientos esquemáticos, reservando dicho tratamiento para el abordaje complementario al presente, el que, como anticipamos, llevará por título *“Al rescate de una democracia a la defensiva y desencantada”*.

-3.4. La articulación entre los “basic interest” y los “best interest”.

A primera vista, todo parece sugerir que ambos grupos de intereses resultan complementarios entre sí, de modo que la defensa y promoción de cada uno de ellos contribuye a asegurar las condiciones más adecuadas para la conjugación plena del restante grupo. En todo caso y en las condiciones menos favorables, la articulación entre ambos tipos no parece plantear a las instancias ciudadanas, comprometidas con principios democráticos, problemas o dificultades imposibles de resolver.

Para facilitar la exposición utilizaremos el rubro de la enseñanza para ilustrar cómo podrían complementarse los intereses compartidos y los intereses diferenciales en el marco de un experimento democrático. En cuanto miembros de una comunidad de destino que pretende prolongarse a través de las sucesivas generaciones, cabe suponer que cada generación está comprometida e interesada en transmitir a sus sucesores las acumulaciones de los mejores aprendizajes y disposiciones asociados con la salud y el vigor de las instituciones y prácticas democráticas. A su vez, en la medida en que la consolidación exitosa de dichas instituciones y prácticas depende de que sus miembros sean capaces de formar y revisar por su cuenta sus propias creencias y convicciones, así como de determinar sus prioridades y orientarse en torno a aquello que torna valiosa a la vida humana, es preciso **asegurar que todos los niños y jóvenes tengan acceso a un paquete básico de entrenamientos y condiciones de maduración moral e intelectual** de modo que al llegar a la edad de su emancipación puedan ser habilitados como agentes morales responsables, autorizados, no sólo como administradores de sus propios destinos y los bienes confiados a su cuidado, si no, además, como testigos irremplazables acerca de las formas más apropiadas de especificar y de promover los intereses compartidos.

Por lo tanto, los *“basic interest”* en este rubro parecen fácilmente identificables: todos estamos igualmente involucrados en asegurar el suministro de un paquete básico de entrenamientos y condiciones de maduración. Es cierto que cada uno de los miembros de la comunidad ciudadana, ya sea sólo o junto con otro es también portador de *“best interest”* con respecto a esos mismos compromisos formativos, en la medida en que cada uno ha acumulado experiencias diferenciales y ha elaborado interpretaciones propias con respecto a la mejor forma de promover la maduración moral e intelectual de las personas, así como con respecto a los márgenes de iniciativas y responsabilidades que pueden otorgarse a los niños y jóvenes, etc. Incluso, en cuanto herederos de diferentes tradiciones religiosas, de identidades culturales y de los legados asociados a los distintos itinerarios a través de los cuales nuestros antecesores llegaron a asentarse en este paisaje cívico compartido, estamos autorizados e interesados en que tales legados culturales y educativos sean prolongados, no sólo a través de su transmisión a nuestros descendientes biológicos, sino también como componentes del acervo de referentes públicamente reconocibles y compartibles y, por lo tanto, como aportes disponibles para todos los integrantes de las nuevas generaciones.

Así, pues, resulta razonable esperar que en el marco de una comunidad democrática se configuren **ciertas tensiones inevitables entre a) las opciones educativas diferenciales** que asumen los padres, los agrupamientos de basados en creencias religiosas, las tradiciones docentes y los establecimientos de enseñanza que buscan acreditar una impronta específica, etc., y **b) el compromiso de asegurar un núcleo compartido de entrenamientos indispensables para el ejercicio pleno de la ciudadanía.** Con todo, los problemas y dificultades que plantea esa polarización aquí no parecen tener la misma gravedad que ya tuvimos ocasión de comprobar cuando se trata de articular los intereses sectoriales con los intereses generales. En efecto, ¿acaso no se podrían compatibilizar **trivialmente** a) el otorgamiento de márgenes relativamente amplios para el despliegue de las opciones educativas diferenciales con b) el ejercicio sistemático por parte de las instancias ciudadanas de ciertos controles y recaudos destinados a asegurar, no sólo que ninguno de los integrantes de las nuevas generaciones resulte privado de acceso al núcleo básico de entrenamientos, si no que, además, esos mismos integrantes, aún no emancipados, no resulten sometidos a tratos abusivos y denigratorios, incompatibles con su dignidad e independencia moral e intelectual?

Y bien, si hemos destacado en negrita el término “trivialmente” ha sido para preparar el camino para una respuesta negativa a la pregunta que acabamos de formular. Tal respuesta negativa se justifica en la medida en que cualquier intento de compatibilizar los “*best interest*” y los “*basic interest*” en el terreno de la educación de las nuevas generaciones está expuesto a ciertos riesgos intrínsecos, asociados a la índole misma de los recursos y oportunidades cuya distribución está en cuestión. En ese sentido, conviene recordar que en el caso de los entrenamientos escolares, la mayor parte de los recursos –por ejemplo, las aulas y sus anexos edificios, el tiempo de dedicación de los docentes- que se utilizan para brindarlos son “**bienes**” de consumo privado y de apropiación excluyente, en el sentido de que cuando son apropiados por unos no resultan disponibles simultáneamente para otros, y que, además, a partir de ciertos niveles de calidad y para ciertas aplicaciones que pueden llegar a ser decisivas, terminan operando como “bienes posicionales”, cuya apropiación resulta valiosa sólo en la medida en que los demás no están en condiciones de acceder a ellos y, por lo tanto, a las oportunidades ventajosas asociadas.

A partir de las anteriores advertencias y consideraciones, resulta fácil concluir que ninguna fórmula de compatibilización entre los “*basic interest*” y los “*best interest*” resulta “inocente” y nos garantiza contra los peligros de las dos pendientes distorsionantes a las que estamos expuestos: o bien el temor de que nuestro compromiso con los *basic interest* termine siendo traicionado nos conduce a estrechar en demasía los márgenes disponibles para las opciones educativas diferenciales, o bien la preocupación por preservar la dignidad y la iniciativa responsable de los ciudadanos en cuanto agentes morales debidamente autorizados a llevar adelante sus exploraciones diferenciales, nos conduce a convalidar distribuciones de recursos y de oportunidades que derivan en asimetrías inercialmente transmitidas de una generación a la siguiente. Y, como es obvio, en ambos extremos, la salud y el vigor de las instituciones y prácticas democráticas están amenazadas.

-4. Entre la imparcialidad y el embanderamiento: el lugar y el alcance de las discrepancias y disidencias en el marco del ejercicio legítimo de la autoridad democrática.

-4.1. Las dos interpretaciones tradicionales del pluralismo democrático y sus divergencias

Aquí se trata de la polarización inevitable entre dos modelos o libretos incompatibles para conjugar las discrepancias y de apelar a una autoridad común en el marco de las instituciones democráticas. El primer libreto al que por comodidad designaremos como “*suprapartidario*”, y cuya ilustración aproximada se encuentra en las tradiciones y prácticas encarnadas por la democracia federalista estadounidense, apuesta a procesar dichas discrepancias y los conflictos inevitables de intereses divergentes, apelando a una instancia compartida de consideraciones imparciales, en las que la pluralidad de testimonios y aportes enfrentados en cada uno de los asuntos de la agenda pública permita ir detectando paso a paso las aristas discriminatorias, las libertades amenazadas, los intereses perjudicados, etc., aumentando así las chances de que el fallo resultante no contenga componentes contrarios a los derechos de los ciudadanos y a los intereses más permanentes de la comunidad. El segundo libreto, en cambio, al que por comodidad designaremos como “*partisano*” y cuya ilustración aproximada se encuentra en las tradiciones y prácticas encarnadas por la democracia británica, asume como punto de partida la irreductibilidad o inzanjabilidad, al menos en los cortos y medianos plazos, de discrepancias decisivas en torno a ciertas cuestiones normativas y a ciertos aspectos básicos de la naturaleza humana. Por lo tanto, considera inviable y en todo caso poco rendidor cualquier intento de apelar a algún plano

plano arquimediano o a un núcleo compartido de elementos de juicio para dirimir dichas discrepancias y para combinar los aportes diferenciales de los distintos núcleos de ciudadanos –separados por tales discrepancias centrales- a la hora de determinar las prioridades de la agenda pública y los contenidos de los fallos institucionales.

Desde la perspectiva asumida por el libreto *partisano*, su opuesto, el libreto *suprapartidario* comete el error inexcusable de amordazar aquellas convicciones y creencias sustantivas que podrían alinear apropiadamente a los ciudadanos con quienes comparten sus posiciones para tratar de incidir sobre los contenidos de los fallos institucionales, a la vez que incurre en la peor de las ingenuidades al dejar abierta la puerta para la intromisión embozada de los alineamientos partidarios por debajo del manto de la supuesta instancia imparcial. En cambio, desde la perspectiva asumida por el libreto *suprapartidario*, la democracia partisana sólo puede desembocar en la fractura del nosotros ciudadano y en el debilitamiento irreversible de la fraternidad cívica, en la medida en que propicia una confrontación exacerbada por el uso sesgado de los recursos de autoridad, así como una oposición irresponsable y desleal que no se considera convocada colaborar con sus informaciones, sus elementos de juicio y sus iniciativas al funcionamiento saneado y vigoroso de las instituciones democráticas.

Para colmo, ambas modalidades de conjugar la democracia conducen en la práctica a propiciar aquellos extremos pesadillescos a los cuales pretenden evitar. La modalidad *suprapartidaria* pretende despojar el ejercicio de la autoridad y de la razón pública de cualquier carga moral y religiosa, del lastre que conllevan las discrepancias entre convicciones doctrinarias omniabarcadoras. Por lo mismo, aleja a todos aquellos ciudadanos comprometidos con sus convicciones y que pretenden dar testimonios de ellas, exponerlas a los testimonios de otros y comprobar su capacidad de contagiar y entusiasmar a otros ciudadanos. El resultado inevitable de esta asepsia moral y filosófica es doble: el reclutamiento de dirigentes meramente expertos en movilizar respaldos puntuales, cuando no cínicos y manipuladores, por un lado y, por el otro, el acondicionamiento de verdaderas reservas de fanáticos y cruzados, que suelen despreciar a los políticos y a toda la escena en que se maneja la agenda pública, pero que son presa fácil de cualquier convocatoria a limpiar el templo de infieles y comerciantes. A su vez, la modalidad *partisana*, en la medida en que tiende a configurar un escenario de alineamientos cívicos polarizados, termina inevitablemente otorgando una gravitación electoral decisiva a aquel núcleo de ciudadanos ubicados en el centro del espectro ideológico, desprovistos de convicciones sustantivas y más volátiles, más dispuestos a optar en función de factores puntuales y de razones meramente prudenciales. Por lo mismo, los dirigentes partidarios terminan empujados a rebajar las aristas de sus plataformas y convocatorias electorales, a converger con sus contendientes en una zona de consensos triviales y a competir con ellos en función de méritos neutralizados –es decir, suprapartidarios- tales como, por ejemplo, credenciales de gestión y de honestidad, disposición a identificarse con los problemas de la gente, etc. Así, pues, terminan reproduciendo aquel modelo que más temían, el modelo de democracia aligerado de cargas morales e ideológicas, tratando de reclutar a un electorado que se caracteriza por la escasa densidad de su memoria cívica, por la fragilidad de sus opciones y de sus lealtades, así como por la cortedad de sus miras.

-4.2. Los despistes de los análisis politológicos en torno a los libretos democráticos.

Una mirada mínimamente atenta a los dos libretos democráticos previamente analizados –el *partisano* y el *suprapartidario*- y a aquellos experimentos institucionales que pretenden inspirarse en dichos libretos, alcanza para comprobar que las **principales diferencias entre ambos modelos y sus respectivas aplicaciones no residen en aspectos meramente procedimentales o sintácticos**, sino que, por el contrario, se **configuran a nivel de los componentes propiamente sustantivos y de las cuestiones propiamente normativas**, en particular, en lo relativo a **los alcances de la agenda pública, a los objetivos y los fundamentos del ejercicio de la autoridad institucional**, las modalidades privilegiadas de canalizar la participación, las iniciativas y los vetos de los ciudadanos de a pie en las instancias de elaboración y sanción de los fallos, la división de responsabilidades entre los mandatos de gobierno y los mandatos de la oposición, los recaudos disponibles para recomponer el “nosotros ciudadano” y asegurar la fraternidad cívica amenazados por la explicitación de las discrepancias de convicciones y de los conflictos de intereses, etc.

Por desgracia, salvo unas poquísimas excepciones, los integrantes de la academia politológica han tendido a analizar y comparar los rendimientos de las distintas modalidades de experimentos democráticos como si todos fueran ejemplares de una misma especie, es decir, como si persiguieran los mismos objetivos, se inspiraran en los mismos principios e ideales y sólo divergieran en los aspectos estrictamente sintácticos, es decir, en los procedimientos y en las reglas establecidas para el funcionamiento de las instancias institucionales. Y bien, en

la medida en que tales análisis y comparaciones terminan siendo asimiladas por los propios dirigentes políticos y por los propios ciudadanos de a pie, tales enfoques despistados contaminan y distorsionan a los experimentos democráticos, comprometiendo su salud y su vigor, introduciendo una pléyade interminable de confusiones y enriedos inextricables en sus prácticas institucionales. En efecto, tales confusiones y distorsiones se generan a partir del momento en que, en el marco de un experimento democrático, se tiende a apelar a convocatorias en las que se superponen desprolijamente componentes de ambos libretos, dando lugar a conjugaciones híbridas tan burdas como inconsistentes, todo lo cual redundará en erosiones irreversibles de la salud y del vigor de aquellos experimentos democráticos que se han dejado arrastrar por esa pendiente de despistes (y no son pocos). Mientras que en el próximo numeral (4.3) incluiré algunas modalidades ilustrativas de tales conjugaciones híbridas, en lo que resta del presente numeral me propongo destacar las principales diferencias **sustantivas** que impiden tratar a ambos libretos como ejemplares de un mismo género de institucionalidad democrática.

-4.2.1. Los componentes diferenciales del marco regulatorio específico que se inspira en el libreto *suprapartidario* –la separación de los poderes, la independencia de los mandatos legislativos y ejecutivos, así como su irrevocabilidad durante el período establecido para su vigencia, la ausencia de resortes disciplinarios que aseguren coaliciones estables para legislar y para respaldar a la rama administrativa, etc.- sólo pueden ser aplicados, entendidos y justificados en el marco de una opción deliberada por ciertos principios de moralidad política asociados a dicho libreto y del rechazo igualmente deliberado a los principios alternativos encarnados en el libreto “*partisano*”. En efecto, tales componentes resultan funcionales a una interpretación sistemática de la autoridad democrática como una instancia a la cual sólo corresponde apelar por default, como último recurso correctivo, y cuya agenda de asuntos, sus prerrogativas y resortes disciplinarios no sólo tienen alcances muy limitados, si no que deben ser reducidos al mínimo compatible con su capacidad de reclutar acatamientos. A su vez, tal interpretación restrictiva de los alcances de la autoridad democrática hace juego con una comunidad ciudadana concebida en términos de lo que Stephan Elkin denomina como una “república comercial”, es decir, como una asociación cuyos miembros no asumen compromisos compartidos con metas de excelencia o de realizaciones valiosas, y cuyos intereses públicos son invocados solamente para corregir deficiencias y abusos muy específicos, pero no para encarar algún plan global de mejoras sistemáticas ni tampoco para trazar proyectos de futuro.

En un marco institucional así concebido, por lo pronto, no hay lugar para desplegar lo que Popper denominaba una “global social engineering” y sí, en cambio para una “piece-meal social engineering”. En segundo lugar, los titulares de los mandatos democráticos **ordinarios** carecen de autoridad para revisar y corregir los contenidos y los alcances del interés público, tal como este resulta especificado a través de sucesivas instancias **extraordinarias** de legislación constitucional cuya autoridad reposa, en último término, en la continuidad interpretativa con la que son reajustados parsimoniosamente los compromisos incorporados en el legado fundacional. Dichos mandatarios ordinarios sólo pueden actuar como meros administradores de aquel núcleo compartido de consensos normativos elementales, desprovistos de connotaciones doctrinarias y de definiciones conceptualmente ambiciosas, que son transmitidos de una generación a la siguiente como componentes básicos de un “civic common sense” sustraído a las discrepancias. En tercer lugar, los ciudadanos son convocados a incidir sobre los contenidos de los fallos institucionales, no en función de sus alineamientos en torno a plataformas partidarias abarcadoras, sino en cuanto testigos involucrados diferencialmente en cada uno de los temas puntuales que integran la agenda pública. Por lo mismo, la sanción de cualquier de dichos fallos no es el resultado de coaliciones partidarias, si no que deriva del reclutamiento de respaldos suprapartidarios. De ese modo, una ley o un acto administrativo no llevan el sello particular del o de los grupos partidarios que tuvieron un protagonismo privilegiado en su elaboración y su sanción, si no que es una especie de resultante anónimo en el que se recogen múltiples aportes, iniciativas y vetos.

-4.2.2. En el otro extremo, los procedimientos y las disposiciones sintácticas que regulan el funcionamiento institucional de aquellos experimentos democráticos inspirados en el libro “*partisano*”, en particular en sus versiones más tradicionales y más polarmente enfrentadas al libreto “*suprapartidario*” –la existencia de un único mandato ciudadano destinado exclusivamente a incidir en la designación de los titulares integrantes de la rama legislativa, la designación indirecta de los titulares de los mandatos ejecutivos a partir de mayorías legislativas, basadas en alineamientos partidarios, el carácter revocable de ambos tipos de mandatos y el

condicionamiento de su vigencia a la obtención de las coaliciones requeridas para legislar y para respaldar los desempeños y las orientaciones propuestas por los titulares de los mandatos ejecutivos, et.,- sólo pueden ser aplicados, entendidos y justificados en el marco de una opción de moralidad política que difiere radicalmente de la asumida por el libreto “*suprapartidario*”. Por lo pronto, la agenda de gobierno, los asuntos que las autoridades consideran como de su incumbencia y el conjunto de prerrogativas atribuidos a los mandatos ordinarios son mucho más amplios en el marco del libreto “*partisano*” que los correspondientes en el marco del restante libreto. En segundo lugar, los ciudadanos son convocados, no a elegir meros administradores confiables de un legado consensuado que define los contenidos del interés público, sino, por el contrario, a otorgar su respaldo a opciones interpretativas globales de tales contenidos, que difieren sustancialmente entre sí. De ese modo, se supone que, al respaldar a algunas de esas opciones en pugna, los ciudadanos pretenden incidir en forma decisiva sobre el destino de su comunidad, mediante el uso de los resortes disciplinarios atribuidos a las instancias autorizadas, marcando rumbos de futuro radicalmente divergentes. En tercer lugar, ese mismo tipo de respaldos ampliados autoriza a los mandatarios electos a aplicar un enfoque global consistente, lo suficientemente ambicioso como para esperar que el mismo promueva avances sistemáticos en la dirección del tipo de mundo en el que se prefiere vivir y del tipo de protagonismos responsables que se pretende asumir. En cuarto lugar, los ciudadanos esperan y exigen de aquellos titulares de mandatos respaldados por sus votos que dichos mandatarios, en ocasión del tratamiento de cada uno de los asuntos de la agenda pública, aún aquellos que revistan los alcances más restringidos, desplieguen y profundicen esa interpretación global que se comprometieron a promover, demostrando su pertinencia y sus rendimientos para abordar cualquier tipo de problemas. Por último, quienes debaten en torno a los asuntos de incumbencia de las autoridades o a cada uno de los fallos legislativos y los actos de gobierno –asumiendo iniciativas, respaldos y vetos- lejos de tratar de disimular o amordazar las discrepancias sustantivas que dividen a los ciudadanos y a sus mandatos con respecto a los contenidos del interés público y a la mejor forma de promoverlo, no tienen empacho en **otorgar a dichos fallos institucionales un inequívoco “sello de origen partidario”**, como confirmación de que a través de ellos, no sólo se pretende marcar un rumbo diferencial, si no, además, ir acumulando avances sistemáticos e irreversibles en esa misma dirección, hasta llegar a disuadir las voces discrepantes y a despojar de gravitación a las resistencias.

-4.3. Los análisis “instrumentalistas” y sus repercusiones perjudiciales sobre las prácticas democráticas

En todo caso, cabría preguntarse si esos análisis y comparaciones “instrumentalistas” que cultivan y difunden sistemáticamente algunos integrantes de la academia politológica, más allá de incurrir en ciertos despistes conceptuales y hacer circular versiones distorsionadas de los experimentos democráticos –y, en particular, de sus libretos inspiradores- repercuten en forma perjudicial sobre la salud y el vigor cívico de las propias instituciones y prácticas involucradas.

En principio, mi respuesta es positiva. Me inclino a creer que dichos análisis contribuyen a confundir a los mandatarios y a los ciudadanos de pie, no tanto porque éstos compartan todas y cada una de sus afirmaciones, si no, mucho más decisivamente, porque tienden a rebajar la relevancia moral y cívica de lo que está en juego en las divergencias entre los dos libretos tradicionales –el *partisano* y el *suprapartidario*- y a desdibujar todo lo que podemos aprender de las trayectorias recorridas por aquellos experimentos democráticos pioneros que se inspiraron en dichos libretos. En ese sentido, importa destacar aquí los dos tipos principales de despistes en que incurrían dichos análisis.

-i) En primer lugar, los análisis “instrumentalistas”, en la medida en que consideran a los dos experimentos democráticos pioneros –el “*británico*” y el “*federalista*” y a sus dos libretos respectivos –el “*partisano*” y el “*suprapartidario*”- como meras variantes sintácticas o procedimentales de conjugar el mismo conjunto de principios normativos y de exigencias de legitimación de la autoridad compartida, incurrían en el pecado inexcusable de soslayar hasta qué punto quienes trazaron e impulsaron cada uno de los dos modelos enfrentados estaban convencidos que su rival configuraba la peor pesadilla imaginable, es decir, el tipo de gobierno más reñido con los compromisos democráticos más básicos.

Por un lado, desde la perspectiva del modelo *suprapartidario* (y del experimento “*federalista*” estadounidense), las distribuciones puntuales de los recursos de autoridad institucional –los mandatos legislativos y de gobierno-, no deben ser utilizadas para dirimir las discrepancias morales y religiosas, ni para zanjar las controversias en torno a los contenidos del interés público. Por lo mismo, un diseño institucional que violara tales

constricciones, sólo podía dar lugar a ejercicio “faccioso” de los recursos de autoridad, puestos al servicio de las ideas y de los intereses de una fracción ocasionalmente mayoritaria, así como para consolidar gobiernos en los que dichas fracciones mayoritarias, no sólo pueden recortar impunemente las libertades y las garantías de los núcleos minoritarios, sino que también tienen vía libre para erosionar las bases mismas de reproducción de sus actividades y condiciones materiales de vida.

Por otro lado, desde la perspectiva del modelo “*partisano*” (y del experimento británico), las instituciones democráticas sólo pueden tomar en serio a los juicios de los ciudadanos y otorgan gravitación a sus pronunciamientos de los ciudadanos, cuando tales juicios y pronunciamientos se traducen en opciones bien perfiladas en cuanto a las orientaciones globales que presiden la aplicación de los recursos de autoridad. Por el contrario, cuando se limitan, como es el caso en el modelo “*suprapartidario*” y en el experimento federalista estadounidense, a seleccionar los mejores mandatarios para administrar un legado intergeneracional de especificaciones consensuadas acerca de los contenidos del interés público, entonces, la ciudadanía puede limitarse a cultivar y expresar preferencias erráticas y superficiales sobre los atractivos de los distintos candidatos que compiten por la titularidad de los mandatos que se adjudican. En todo caso, nada obliga a los ciudadanos a considerarse convocados a alinearse a favor o en contra de propuestas ambiciosas de cambios ni a acumular elementos de juicio con respecto a ese tipo de propuestas, ni a justificar su voto por tal o cual candidato, salvo en términos de su confianza en sus méritos personales. En ese sentido, la modalidad básica de los mandatos que se adjudican, tanto los legislativos, como los ejecutivos, son de índole personal en un doble sentido: a) los titulares de dichos mandatos sólo están comprometidos con dos o tres puntos de la agenda pública en los que basaron su campaña electoral, pero no han asumido compromisos con opciones interpretativas globales acerca de los contenidos del interés público y las prioridades a atender, ni con orientaciones abarcadoras o estrategias ambiciosas acerca de la utilización sistemática de los recursos de autoridad; b) cada uno de los ciudadanos otorga su respaldo en base a consideraciones que no tienen por qué coincidir con las que manejan los restantes votantes. Y como consecuencia de esa configuración personalizada y “abierta” de los mandatos, los ciudadanos no están autorizados ni disponen de las instancias públicas apropiadas para ejercer un control sobre el desempeño de los mandatarios y para pedirles cuenta de cómo administraron sus habilitaciones.

A su vez, como respuesta a las acusaciones del libreto “*suparpartidario*”, según las cuales el libreto “*partisano*” facilita e incluso promueve la apropiación y la aplicación “facciosa” de los recursos de autoridad institucional, concentrándolos en las manos de una secta doctrinaria, integrada por quienes comparten las mismas convicciones e intereses, el libreto partisano acusa a su rival de facilitar y promover otro tipo de apropiaciones “facciosas” de esos mismos recursos, en este caso en manos de los distintos grupos de intereses –en particular, los mejor organizados, los más aventajados económicamente o con mayor capacidad de negociación– dispuestos a movilizarse específicamente para incidir en el tratamiento puntual de aquellos asuntos en los que están directamente involucrados.

Así, pues, al pretender ubicar en un mismo plano a los dos libretos democráticos tradicionales y comparar sus rendimientos en distintos rubros y para contextos de aplicación diferentes, los análisis “instrumentalistas” olvidan esos intercambios de acusaciones, así como las declaraciones de quienes defienden a cada uno de los dos modelos enfrentados, en el sentido de que aún admitiendo sus propias deficiencias e inconvenientes, están dispuestos a soportarlas antes de suscribir los principios de diseño institucional que inspiran al modelo rival: para ellos no se trata de optar entre dos versiones del experimento democrático, si no entre una versión que procura conjugar los compromisos normativos básicos asociados a tal experimento y otra versión que los desconoce o los conjuga en forma distorsionada.

-ii) En segundo lugar, los análisis “instrumentalistas”, así como se muestran incapaces de advertir las divergencias morales y cívicas que separan a ambos libretos tradicionales, de la misma manera –y por las mismas razones– resultan incapaces de enjuiciar en términos normativos a dichos libretos como interpretaciones controversiales de los principios e ideales democráticos, así como a extraer de dicho enjuiciamiento las conclusiones que a esta altura resultan inevitables: la bancarrota irreversible de ambos libretos y la necesidad de explorar modalidades alternativas de institucionalidad democrática, tanto a nivel de sus diseños operativos, como en lo referente a sus recursos justificatorios. En particular, tal bancarrota resulta inocultable en relación con aquellos aspectos problemáticos sobre los que nos hemos venido ocupando en este apartado: ¿cuál es el lugar disponible para la explicitación de las discrepancias en el marco de un experimento democrático y cómo deben ser dirimidas las mismas de forma que no resulte comprometida la unidad del nosotros ciudadano y la

fraternidad cívica que debe reinar entre los miembros? En otros términos, ¿cómo es posible reconciliar el pluralismo de convicciones y creencias en torno a los contenidos y alcances del interés público, así como las divergencias conflictivas de intereses, por un lado y, por el otro, el ejercicio compartido de una autoridad que se justifica por el principio del autogobierno y por el reconocimiento de la misma autoridad y dignidad a todos sus miembros?

A partir de las anteriores formulaciones, resulta fácil advertir que los diseños divergentes de los dos libretos tradicionales constituían intentos de responder a un mismo anudamiento de problemas y dificultades –al que cualquier experimento democrático estaba obligado a enfrentar- pero que sus respectivas soluciones, no sólo apuntaban en direcciones opuestas, sino que, además, sólo se cuidaban de evitar una de las dos fuentes de amenazas a la salud y el vigor de dichos experimentos y, por lo mismo, quedaban expuestos a las distorsiones provenientes de la fuente restante.

Por un lado, el libreto “*suprapartidario*” apuesta a preservar la unidad del nosotros ciudadano, mediante a) la limitación de la agenda del interés público, así como las incumbencias y prerrogativas de la autoridad democrática, b) la sustracción del ejercicio de los mandatos institucionales a la dilucidación de las controversias sustantivas, c) el aislamiento de un núcleo compartido de consensos definitorios de los contenidos del interés público como un legado intergeneracional de pronunciamientos de “We, the people”, no revisables por los mandatos ordinarios. Y como ya señalamos, son muy altos los precios a pagar y los riesgos a los cuales hay que exponerse por ese amordazamiento de las discrepancias y por esa neutralización de los principios de moralidad política apelables en el procesamiento de los asuntos de la agenda pública.

Por otro lado, el libreto partisano procuraba preservar la autoridad y el involucramiento pleno de los ciudadanos, convocándolos a gravitar con sus pronunciamientos puntuales en cada una de las encrucijadas de su destino colectivo para dilucidar las principales controversias sustanciadas y para fijar los rumbos de dicho destino colectivo. Y aquí también cabe recordar que el precio de esa apuesta es muy alto, no sólo por cuanto pone en peligro las bases de la fraternidad cívica, los mínimos de lealtad y colaboración exigibles a los miembros de un experimento de convivencia basada en principios comunes, si no, también por cuanto otorga a los disidentes sistemáticamente perdedores en tales dilucidaciones, las mejores justificaciones esgrimibles para desertar de esa comunidad o para embarcarse irreversiblemente en proyectos de secesión.

-4.4. Los enfoques “instrumentalistas” y las combinaciones híbridas.

A esta altura es importante subrayar que la democracia, en tanto experimento cívico-moral, y ambos libretos tradicionales, son inventos “plebeyos”, al igual que el parlamento, la división de poderes, los partidos políticos, etc. Lejos de ser el resultado de una elaboración deliberada y sistemática por parte de mentes especialmente entrenadas para dicho trabajo, fueron perfilándose como otros tantos precipitados desprolijos de impulsos milenarios protagonizados por aquellos sectores sociales más expuestos a las arbitrariedades de las minorías concentradoras de los recursos de riqueza y de dominación. Por otra parte, puede reivindicar orgullosamente su origen y condición de “plebeyos” en razón de haber suscitado, desde su origen mismo, descalificaciones sistemáticas por parte de los núcleos ilustrados.

En todo caso, lo cierto es que tales arraigos plebeyos no daban lugar a confusiones en cuanto a los perfiles diferenciales de ambos libretos, si no, por el contrario, a un sentido común capaz de discernir sus principales implicaciones prácticas y para apreciar hasta qué punto la opción entre ambos pone en juego forma parte de un dilema moral sustantivo, en el que están en juego la índole de la autoridad democrática, de la razón pública y de la ciudadanía que se pretende consolidar. Así, por ejemplo, el menos ilustrado de los ciudadanos involucrados en un experimento inspirado en el libreto británico sabe que a) la atribución de autoridad democrática a un fallo legislativo en ese marco institucional no equivale a considerarlo como la única interpretación saneada y legítima del interés público y que b) dicha atribución no inhabilita a quienes se opusieron a su sanción a reivindicar su posición discrepante como una interpretación igualmente legítima del interés público, a expresar públicamente sus reservas y a procurar que las mismas terminen reconocidas como pertinentes. En términos más generales, los ciudadanos profanos, en cuanto usuarios involucrados en los experimentos democráticos tienen perfectamente claro todo lo que está en juego en la opción por uno u otro de ambos libretos. En ningún momento se les ocurre formular esa alternativa como algo dilucidable trivialmente mediante el contraste entre sus respectivos desempeños y rendimientos, medibles exclusivamente por parámetros “neutrales” tales como sus tasas de crecimiento económico, sus respectivos niveles de estabilidad institucional, de acatamiento de las leyes, etc. Por el contrario, para dichos usuarios la cuestión con lleva una fuerte carga normativa, ya que se

plantea en torno a lo que es justo y a lo que nos debemos unos a otros, a las bases sobre las que debe edificarse la autoridad democrática para que merezca nuestra lealtad.

Toda esas acumulaciones de “moral and civic common sense” ha estado sometida en las últimas tres décadas a un proceso de disolución que obedece, en último término, al predominio creciente de las perspectivas “instrumentalistas” a la hora de abordar las instituciones y prácticas democráticas. Sería absurdo atribuir la responsabilidad central del despilfarro de tales acumulaciones a los científicos sociales, a los economistas, politólogos y sociólogos. Es posible que algunos de ellos hayan colaborado a prestigiar ese tipo de enfoques “instrumentalistas”, pero fueron ante todo los dirigentes políticos y los propios ciudadanos de las democracias más arraigadas y mejor consolidadas quienes, adoptando la línea del menor esfuerzo, respaldaron esa trivialización de la agenda pública y de las propuestas alternativas, despojándolas de su carga moral sustantiva y quienes terminaron entronizando una “democracia desilusionada”, sin márgenes disponibles para elaborar sueños creíbles acerca de un mundo diferente y mejor.

Si bien esta última pendiente de empobrecimientos y desencantos será uno de los ejes centrales del eje central del abordaje complementario al presente, aquí conviene recordar las instituciones y prácticas democráticas siempre han estado y estarán expuestas a deslizarse por esa pendiente en la medida en que no sean capaces de enfrentar con solvencia aquel dilema que hemos analizado a lo largo del presente numeral (4) - ¿cómo es posible compatibilizar el margen disponible para las discrepancias acerca de los contenidos del interés público con el ejercicio legítimo de la autoridad democrática?- ni escapar a la falsa alternativa entre las dos apuestas tradicionales y polarmente enfrentadas, es decir, la imparcialidad suprapartidaria, en un extremo y al embanderamiento partidario, en el extremo opuesto. Así, pues, esas mismas orfandades conceptuales que le impiden enfrentar dicho dilema central se manifiestan, tanto a través de la incapacidad para imaginar una tercera alternativa a los diseños propuestos por los dos libretos tradicionales, como a través del recurso reiterado a soluciones híbridas en las que se superponen componentes de ambos libretos.

Para completar este apartado, incluimos a continuación algunos señalamientos mínimos en torno a esas dos insolencias complementarias: por un lado, algunas indicaciones acerca de los lineamientos básicos de un tercer libreto alternativo, por el otro, algunas referencias descalificatorias a aquellas combinaciones híbridas a través de las cuales se ha pretendido -tanto desde la academia como desde la práctica política- acondicionar un camino del medio entre ambos libretos, una especie de atajo capaz de retener las discrepancias partidarias y los consensos estabilizadores.

En cuanto a la tercera propuesta, me remito al artículo que hemos redactado junto con Nicolás Portela y que figura en el Cuaderno del Claeh N° 100 (agosto 2012). En dicho artículo esbozamos en trazos gruesos un tercer libreto alternativo al que denominamos como “uruguayo-alemán” y al que aún le falta completar algunas de sus implicaciones morales y cívicas. En términos negativos, dicha propuesta alternativa se diferencia con respecto a los libretos tradicionales en la medida en que la atribución de autoridad a los fallos democráticos no se justifica porque a) los mismos constituyan el resultado filtrado de una coalición suprapartidaria de mandatos institucionales que opera dentro de los reducidos márgenes establecidos por el legado intergeneracional de consensos acerca de los contenidos del interés público y de las incumbencias de las instancias legislativas y administrativas (tal como ocurre en el marco del libreto “federalista”), ni tampoco porque b) consagren los alineamientos partidariamente disciplinados de aquellos mandatos institucionales que reúnen ocasionalmente respaldos ciudadanos predominantes en torno a iniciativas y propuestas inequívocamente embanderadas con una interpretación controversial del interés público.

En ese sentido cabe afirmar que ambos libretos incurren en el mismo error: procuran reconstruir la autoridad específica atribuible a las instituciones y prácticas democráticas a partir de rasgos o componentes **localizables en cada uno de los fallos puntuales o en cada una de las instancias a través de las cuales se elaboran dichos fallos**. Por lo mismo, aquellos aportes, iniciativas y vetos que en cada caso son dejados de lado y que figuran como posiciones disidentes, quedan excluidos definitivamente como componentes disociados de aquel nosotros compartido en torno al cual se anudan las autorizaciones y los reconocimientos recíprocos. En cambio, el tercer libreto comienza por descartar esa estrategia “localizadora” como conducente a un callejón sin salida y opta por dar cuenta de los títulos de autoridad democrática como algo que sólo puede ser atribuido a aquella continuidad de exploraciones, contrastaciones y revisiones compartidas a través de la cual, no sólo se recompone la fraternidad cívica, si no que, además, quienes figuraron ocasionalmente como disidentes resultan reincorporados al nosotros ciudadano y reconocidos como miembros autorizados de una comunidad “epistemológica” dispuesta a revisar sus conclusiones todas las veces que sean necesarias. En segundo lugar, el tercer libreto -como veremos con más detalle en la segunda parte de este trabajo- no amordaza ni soslaya las

discrepancias sustantivas, ni tampoco las consideran como definitivamente inzanjables a través de los recursos e instancias que disponen las instituciones democráticas. Lejos de **alinearse con la imparcialidad suprapartidaria** o con el **embanderamiento partisano**, apuesta a elaborar los fallos democráticos a través de **coaliciones interpartidarias flexibles** cuyos miembros ocasionales se esfuerzan por reducir al mínimo las discrepancias y agotan todas las chances de incorporar la mayor cantidad posible de aportes provenientes de las posiciones disidentes: advertencias, temores, desconfianzas, etc.

En el rubro de las combinaciones híbridas incluyo a i) las “Políticas de Estado” –“PdE” en adelante y ii) las “coaliciones presidencialistas con bancadas legislativas alineadas en forma estable y disciplinada”. En ambos casos se trata de arreglos tan carentes de principios como de consistencia interna que, lejos de enfrentar los dilemas pendientes en torno al lugar y el alcance de las discrepancias procesables legítimamente en el marco de las instituciones democráticas, se han limitado a convalidar atajos tan perezosos como conceptualmente desprolijos.

-i) La primer modalidad de combinaciones híbridas son las que suelen designarse como “PdeE”. En nuestros días, abundan los dirigentes políticos y los académicos que se inclinan a considerar el recurso de ese tipo de “subterfugio institucional” como una marca de madurez institucional y consolidación democrática. En términos más específicos, tal recurso suele ser presentado como una especie de **panacea que permitiría reconciliar lo aparentemente irreconciliable: las inevitables discrepancias que permiten ofrecer a los ciudadanos una pluralidad de opciones relevantes y bien diferenciadas, por un lado y, por el otro, la configuración de un núcleo de consensos básicos, sustraídos a las discrepancias interpartidarias y a los resultados cambiantes de las contiendas electorales, a partir de los cuales sería posible otorgar continuidad intertemporal a ciertos lineamientos compartidos en materia de legislación y de gobierno que se consideran imprescindibles** en un experimento democrático saneado y vigoroso. Dado que el análisis detallado de este recurso es uno de los temas centrales abordados en el artículo recién citado, nos remitimos a dicho trabajo y nos limitamos aquí a subrayar hasta qué punto las **invocaciones reiteradas a un recurso tan desprolijo constituye un síntoma particularmente ilustrativo del tipo de despistes a los que están expuestas las tradiciones democráticas actualmente disponibles**. En ese sentido, alcanza con señalar que **las propuestas de adoptar “PdE”**

-a) han incurrido en fracasos sistemáticos pueriles cada vez que han pretendido trazar -y justificar- la línea divisoria que permitiría diferenciar aquellos asuntos o componentes del interés público en torno a los cuales sería posible acordar lineamientos consensuales suprapartidarios, por un lado y, por el otro, aquellos otros asuntos sobre los cuales los partidos políticos marcan sus discrepancias y se legitiman como opciones relevantes;

-b) terminan desembocando en dos tipos extremos de acuerdos, igualmente inapropiados como base para acondicionar una solución intermedia, diferente tanto a las coaliciones suprapartidarias puntuales del libreto federalista, como a los alineamientos mayoritarios que responden a disciplinamientos partidarios, ya que, o bien se trata de acuerdos triviales y despojados de orientaciones precisas, o bien se trata de acuerdos muy específicos sobre asuntos con alcances muy reducidos.

-ii) La segunda modalidad de “combinaciones híbridas” se ilustra a través de los intentos tan despistados como desprolijos de entreverar componentes de diseño institucional de ambos libretos tradicionales sin tener en cuenta sus respectivos marcos de moralidad política. Como diría Dworkin se trata de “mezclas sin recetas” ni principios que guíen el compuesto resultante y lo justifiquen en términos de una interpretación consistente de los compromisos democráticos. En ese sentido, se puede afirmar que su elaboración y aplicación son coherentes con aquellas perspectivas y análisis “instrumentalistas” a los que antes hemos hecho referencia. En nuestra región más cercana han sido presentados como innovaciones institucionales rendidores ciertos formatos democráticos, lejanamente inspirados en algunos análisis poco esclarecedores de G.Sartori. En tales formatos, si bien sus dos tipos de mandatos se ajustan al diseño y al libreto federalista, en la medida los ejecutivos son independientes de los legislativos y ambos son irrevocables, se atribuye al titular del mandato presidencial la tarea de conformar y mantener una coalición parlamentaria estable como condición imprescindible para el desempeño exitoso y estabilizado de las instituciones democráticas. En términos más precisos, todos los actores involucrados en tal formato –tanto los dirigentes políticos, como los ciudadanos- asumen el supuesto según el cual el titular del cargo presidencial sólo puede ejercer plenamente sus prerrogativas y contribuir a la

maduración y consolidación del experimento democrático si es capaz de conformar y mantener un alineamiento mayoritario estable y disciplinado de mandatos legislativos, capaz de operar como un respaldo estable.

En el presente contexto, lo que importa no es tanto identificar en detalle las múltiples inconsistencias en las que incurrir este tipo de formatos institucionales híbridos, si no advertir hasta qué punto la tolerancia con respecto a las **desprolijidades conceptuales de dichos formatos constituyen un síntoma tan inequívoco como alarmante acerca de las pérdidas de rumbos y de memoria que han venido contaminado a nuestras tradiciones democráticas a lo largo de las últimas décadas**. En efecto, ¿de qué otra manera explicar las incongruencias pueriles que se encuentran en las convocatorias prácticas y las formulaciones teóricas asociados a la aplicación de tales formatos híbridos, si no como el resultado indirecto de la pérdida de vista de aquellos principios normativos que guiaron la evolución de las instituciones democráticas y el despliegue de los dos libretos tradicionales, así como del olvido de nuestras acumulaciones más esclarecedoras en ese terreno?

Un par de señalamientos alcanza para ilustrar este punto. En primer lugar, no parece haber ninguna forma de compatibilizar la exigencia de **asociar el ejercicio cabal del mandato presidencial al aseguramiento de un respaldo legislativo de base partidaria**, por un lado y, por el otro, **la índole específica de dicho mandato, es decir, la investidura personal de un presidente suprapartidario** o, en términos profanos, alguien que es proclamado como “el presidente de todos los ciudadanos” y cuya autoridad institucional sólo puede ser reivindicada y ejercida en tales términos. En efecto, estamos obligados a optar entre dos formas opuestas de basar la autoridad legítima del titular del principal mandato ejecutivo: o bien derivarla de su condición de dirigente de una coalición partidaria –compuesta de uno o más alineamientos partidarios- con respaldos parlamentarios suficientes para sancionar fallos legislativos y de gobiernos, o bien derivarla de su condición de destinatario de un mandato independiente, lo que implica que sus iniciativas y vetos no estarán necesariamente alineados con los de alguna fracción legislativa.

En segundo lugar, a pesar de que el formato híbrido se propone asegurar que el desempeño del mandato presidencial cuente con los respaldos legislativos de ciertas fracciones partidarias, ofreciendo las condiciones y los incentivos institucionales más propicios para la configuración de alianzas estables entre ambos polos, sin embargo, no acierta a identificar el único tipo de resortes disciplinarios que es preciso disponer para que cada uno de esos polos no pueda incurrir impunemente en incumplimientos de sus compromisos, es decir, sin exponerse a que el polo restante ponga en marcha una instancia en la que los mandatos en juego puedan ser revocados. Y con el agravante de que un formato institucional que apuesta al alineamiento estables de los dos tipos de mandatos pero no es capaz de establecer mecanismos formales de responsabilización y de disciplinamiento, puede terminar fomentando el recurso a condicionamientos informales asociados a las prácticas más repudiables y distorsionantes, tales como la venalidad, la extorsión y el sometimiento de los mandatos democráticamente legitimados a decisiones provenientes de instancias carentes de dicha legitimación.

-5. Las insolvencias insubsanables en que incurrir las estrategias empleadas para justificar la autoridad normativa de los fallos de las instituciones democráticas.

-5.1. El margen irreductible de discrepancias y su desafío a la autoridad de las instituciones democráticas.

Podemos discrepar acerca de cuál es la combinación más apropiada de instancias de elaboración y de voto que deben ser recorridas para que todo el proceso de elaboración de un fallo institucionalmente autorizado y el resultado final se ajusten a aquellas exigencias de convalidación asociadas a los compromisos democráticos. En todo caso, sería insensato esperar que a) las deliberaciones, aún las más parsimoniosas y desapasionadas, diriman todas las discrepancias sobre los asuntos de interés público y que b) las propuestas, aún las más ampliamente respaldadas, no dejen lugar para disidencias con fuertes arraigos y fundamentaciones bien elaboradas.

A partir del reconocimiento de ese margen irreductible de discrepancias y disidencias, las instituciones democráticas se enfrentan a un doble desafío. Por un lado, están obligadas a ofrecer a quienes disienten con sus fallos y a quienes discrepan con las interpretaciones predominantes del interés público, razones suficientemente vinculantes para estar dispuestos a acatar dichos fallos y a colaborar lealmente con su aplicación. Por otro lado, deben ofrecer asimismo garantías a todos sus miembros, disidentes o no, no sólo de la reversibilidad de dichos fallos, sino de que su aplicación sistemática durante un período suficientemente prolongado no termine desencadenando una constelación de condicionamientos tales que tornen cada vez más difícil o costoso

mantener públicamente las disidencias, los testimonios críticos y las propuestas alternativas a las predominantes.

A su vez, ese mismo desafío admite ser reformulado como el anudamiento de una tensión inherente a los dos principales compromisos normativos que presiden las instituciones democráticas, asociados en el marco de la tradición griega con las exigencias de *isegoría* y de *isonomía*. En efecto, dichas instituciones reconocen a sus miembros como agentes morales libres y responsables y, por lo tanto, habilitados para formar y revisar sus propias creencias y convicciones, así como para orientar sus destinos de acuerdo a sus propios ordenamientos de prioridades y concepciones en torno a aquello que otorga valor a sus vidas. A partir de ese reconocimiento, una comunidad organizada en base a principios democráticos debe cumplir con una doble vertiente de exigencias. Por un lado, con arreglo al principio de *isegoría*, no puede obligar a sus miembros a acatar y colaborar lealmente con fallos institucionales en cuya elaboración no hayan sido tenidas en cuenta sus creencias y convicciones o no hayan dispuesto de instancias apropiadas y oportunidades equitativas para incidir en la determinación de sus contenidos. Por otro lado, con arreglo al principio de *isonomía*, los contenidos sustantivos de esos mismos fallos deben estar exentos de sesgos discriminatorios o, dicho en términos positivos, deben adjudicar un trato de igual respeto y consideración –“*equal concern*”- a los destinos y a los intereses de cada uno de los miembros de la comunidad ciudadana.

Ambos tipos de exigencias derivan del compromiso normativo básico que asumen las instituciones democráticas con la igualdad moral y cívica de sus integrantes, pero sus alcances y aplicaciones son divergentes: mientras *las exigencias asociadas al principio de la isegoría son de índole sintáctica o procedimental y se aplican a los procesos e instancias de elaboración de los fallos institucionales*, en cambio, *las exigencias asociadas al principio de isonomía son de índole semántica o sustantiva y se aplican a los contenidos de los fallos institucionales*. Y bien, las especificaciones anteriores nos permiten formular con la mayor precisión el doble desafío/problema que deben resolver las instituciones democráticas para legitimar la autoridad de sus fallos, aunque quizás resulte más apropiado considerar a ambos como las dos vertientes complementarias de un mismo desafío/problema.

En primer lugar, a lo largo de lo que podríamos designar como **la vertiente “objetiva” del problema de la autoridad democrática saneada**, volvemos a reencontrarnos con las tensiones inevitables entre las exigencias *isegóricas* y las *isonómicas*. En particular, el cumplimiento de las exigencias asociadas al principio de *isegoría* no garantiza que los fallos resultantes no contengan sesgos discriminatorios en perjuicio de algunos de los miembros de la comunidad ciudadana. En la medida en que se compruebe que tales fallos violan las exigencias asociadas al principio de *isonomía* y no tratan todos los miembros con el mismo respeto y consideración, la autoridad de las instituciones democráticas resulta cuestionada y no pueden reclamar a los miembros discriminados que acaten dichos fallos y que colaboren lealmente con su aplicación. Así, por ejemplo, desde el momento en que las instancias institucionales del Tercer Reich sancionaron disposiciones discriminatorias contra los ciudadanos alemanes con ascendencia judía, dichas instancias se habían despojado de aquellos títulos de autoridad que les permitían exigir obediencia y lealtad, no sólo a los ciudadanos específicamente discriminados, si no a cualquier otro miembro que asumiera tal desigualdad como un agravio a su dignidad cívica, es decir, a “*las bases públicas de su autorrespeto*”.

Por cierto, todas las disposiciones contienen y aplican diferenciaciones al nivel de los casos abarcados, de las condiciones exigidas, de los tipos de tratamiento adjudicados, etc., sólo que se supone que tales “discriminaciones” pueden ser, no sólo compatibles con las exigencias *isonómicas*, si no derivadas de una interpretación apropiada de esas mismas exigencias. En ese sentido, el régimen de acceso diferencial a plazas universitarias que se conoce como “acción afirmativa” incluye diferenciaciones en base a antecedentes raciales, al igual que las leyes del apartheid en Sudafrica y las aplicadas a los judíos en la Alemania gobernada por el nazismo. El problema es que mientras en esos dos casos extremos, los sesgos discriminatorios son trivialmente comprobables y no pueden ser justificados en el marco de una comunidad comprometida con el principio de *isonomía*, en la mayor parte de los restantes casos, en cambio, la compatibilidad entre las disposiciones sancionadas por las instancias democráticas y dicho principio resulta un asunto controversial que no puede ser dirimido trivialmente. Más aún, como antes señalamos, los libretos democráticos tradicionales, en particular, los que inspiran a los experimentos británicos y estadounidense adoptan criterios muy diferentes para resolver las tensiones inevitables entre los componentes sintácticos y los componentes semánticos de las instituciones y prácticas democráticas. En todo caso, dichas tensiones ya han sido abordadas anteriormente y serán retomadas más adelante. En cambio, el abordaje de la vertiente complementaria nos obliga a enfrentarnos con otros componentes mucho menos frecuentados en los análisis de las instituciones y las prácticas democráticas.

En segundo lugar, a lo largo de lo que podríamos designar como **la vertiente “subjetiva” del desafío/problema de la autoridad democrática saneada**, la dificultad a la que nos enfrentamos es cómo responder a los reclamos y los cuestionamientos de quienes *disienten y se consideran agraviados por ciertos sesgos que –a su juicio– predominarían sistemáticamente en los fallos sancionados por las instituciones democráticas*. En efecto, no alcanza con responderles que ellos dispusieron de las mismas chances que los demás ciudadanos para volcar el resultado en la dirección contraria, por cuanto el motivo de su agravio es que, precisamente, esa equidad isegórica sólo se aplica en un plano estrictamente formal, *de jure*, es decir, sin tener en cuenta cómo están distribuidas *de facto*, en la comunidad de referencia, las disposiciones a respaldar ciertas orientaciones o a revisar las convicciones y creencias predominantes. Más aún, en la medida en que los disidentes no reciben **señal pública alguna que les garantice** la disposición de los restantes miembros a i) reconocer al menos como compartibles ciertos elementos de juicio que justifican algunos de sus temores y desconfianzas con respecto a las orientaciones predominantes, y ii) no dar por resueltas definitivamente las cuestiones en torno a las cuales se plantean las discrepancias y dejar abierta la puerta para que en el futuro ciertos elementos de juicio vengan a confirmar algunas de las posiciones discrepantes o a desautorizar a las orientaciones predominantes, en esa misma medida, tales disidentes están habilitados a concluir que su condición como ciudadanos se asemeja a la de los que son víctimas de tratos discriminatorios, es decir, que no están reconocidos como miembros plenos de esa comunidad de destino, que no están abarcados por los mismos lazos de fraternidad cívica y que, por lo mismo, dicha comunidad no está autorizada –no se ha ganado el derecho– a reclamarles acatamientos y lealtades incondicionales.

-5.2. Una falsa alternativa en torno a las estrategias más frecuentadas de justificación de la autoridad de los fallos democráticos.

Una rápida recorrida al repertorio de respuestas disponibles para resolver los desafíos/problemas que acabamos de formular añade una nueva confirmación al diagnóstico, ya adelantado, según el cual el acervo tradicional de recursos conceptuales acumulados en torno a las instituciones y prácticas democráticas adolece de insolencias insubsanables. Me propongo añadir algunos elementos básicos de juicio destinados a respaldar dicho diagnóstico y a tales efectos me ajustaré al siguiente itinerario expositivo.

En primera instancia voy a centrar mi análisis en aquellas las dos estrategias profanas y polarmente enfrentadas de justificación de la autoridad normativa de los fallos democráticos que figuran como las más frecuentadas, tanto en las convocatorias de los dirigentes políticos, como en los comentarios de los analistas especializados. Me refiero a la alternativa que enfrenta a) aquellas estrategias de fundamentación que localizan la fuente específica de dicha autoridad en **ciertos méritos o virtudes intrínsecas al propio ejercicio de las instancias y procedimientos** ajustados a principios y exigencias democráticas, por un lado y, por el otro, b) aquellas otras estrategias que apelan a **méritos y valores extrínsecos a dichas instancias y prácticas reguladas** y que optan por **localizar la fuente específica de esa misma autoridad en ciertos resultados promovidos –directa o indirectamente– o en ciertos rendimientos asegurados** a partir del ejercicio sistemático de tales instancias y procedimientos. Me adelanto a señalar que el enfrentamiento entre las dos estrategias mencionadas configura, a mi juicio, una falsa alternativa, por cuanto ambas formulaciones incurren en círculos viciosos y terminan atrapadas en callejones sin salida muy similares. En efecto, a pesar de que pretenden ofrecer a quienes disienten con los fallos de las instituciones democráticas, razones suficientes para que estén dispuestos a acatarlos y a colaborar lealmente con su aplicación, **dichas formulaciones terminan apelando a aquello mismo que está en discusión** o sometido a cuestionamientos por parte de los disidentes, dando por supuesta alguna modalidad de consenso unánime, o bien sobre los procedimientos y reglas que presiden la elaboración de los fallos, o bien sobre los resultados obtenibles a partir de su aplicación sistemática.

En segunda instancia, trataré de ampliar el repertorio de respuestas posibles y exploraré la posibilidad de trazar otros ejes de diferenciación, más o menos complementarios a aquel que distingue entre las justificaciones basadas en componentes intrínsecos y las basadas en componentes extrínsecos. Y para rastrear esos otros ejes y las opciones respectivas no tenemos más remedio que desbordar el plano de las convocatorias y los comentarios habituales e incursionar en aquellos aportes especializados de la Filosofía Política, frecuentados casi exclusivamente por quienes cultivan sistemáticamente dicha disciplina. Precisamente, en ese plano más especializado figuran, por lo pronto, aquellos aportes de Rawls acerca de las principales modalidades de dirimir asuntos contenciosos, de zanjar litigios entre reclamantes y de adjudicar recursos escasos entre los miembros de una comunidad regida por principios de justicia. A su vez, tales modalidades de adjudicación, no sólo están

asociadas a criterios específicos de legitimación de sus fallos, sino que, además, parecen sugerir otros ejes complementarios de diferenciación entre las estrategias opcionales disponibles para justificar el carácter vinculante de dichos fallos.

-5.3. Las justificaciones basadas en valores o méritos intrínsecos.

-5.3.1. En una primera aproximación, la estrategia más elemental para justificar la autoridad de los fallos elaborados por las instituciones democráticas y con arreglos a las exigencias y procedimientos asociados al principio de isegoría, consiste en destacar que a través del cumplimiento de tales exigencias

-a) cada uno de nosotros es reconocido y tratado como miembro de una comunidad de agentes morales libres y responsables, iguales entre sí en términos de dignidad y autoridad;

-b) se garantiza a cada uno de los miembros de esa comunidad oportunidades equitativas de incidir en la determinación de los fallos institucionales a los que todos deben acatar y con cuyo cumplimiento deben colaborar;

-c) las divergencias de opiniones acerca del interés público se dirimen en base al único criterio compatible con la igualdad de méritos entre los miembros de la comunidad, esto es, según la cantidad de respaldos que recibe cada una de propuestas enfrentadas.

Más adelante distinguiremos distintas versiones de esta estrategia. En su versión más elemental, a la que designaremos “**la versión del oráculo autorizado**”, el mero cumplimiento de todos los requisitos y exigencias del principio de isegoría, convierte al fallo resultante en vinculante e inapelable, de modo que no queda lugar para mantener las posiciones discrepantes como alternativas con algún grado de legitimidad. En ese marco, por más elementos de juicio que los miembros disidentes puedan esgrimir para cuestionar el acierto o la corrección del fallo, **una vez que el “oráculo democrático” se ha pronunciado ya no disponemos de ninguna instancia alternativa para apelar contra él.**

En todo caso, para completar esta formulación, es preciso identificar **cuáles son los componentes estrictamente sintácticos que confieren autoridad normativa a los fallos resultantes, así como las razones a partir de las cuales, no sólo cabe atribuir a las instancias democráticas esa virtud oracular sino que, además, resulta justificado otorgarle a dichas instancias –y a sus fallos- méritos morales superiores a los de cualquier otra instancia alternativa.** En realidad, las razones que justifican tales atribuciones ya han sido adelantadas en los literales a), b) y c) que acabamos de incluir, en particular, en el primero de ellos. La respuesta es que los pronunciamientos de los miembros de la comunidad democrática, o el de sus mandatarios debidamente habilitados, constituyen el único oráculo apropiado cuyo fallo soberano es vinculante en razón de que la composición de esas instancias de consulta se **atiene y conjuga estrictamente la vigencia plena del principio de igualdad moral y cívica entre los miembros de la comunidad.** Cualquier modalidad alternativa de toma de decisiones adoptada por la comunidad para determinar los contenidos del interés público que violara directa o indirectamente ese compromiso normativo fundamental, indisociable del ideal democrático de autogobierno, no podría reclamar a sus miembros el acatamiento incondicional a sus fallos y la colaboración leal para su aplicación.

Así, pues, el principio de igualdad política se convierte en el único punto en torno al cual es posible reclutar un consenso unánime, ya que cabe suponer que nadie en su sano juicio estaría dispuesto a aceptar que los demás lo descalifiquen y se atribuyan una autoridad moral e intelectual superior a la suya, al menos cuando lo que está en juego son las orientaciones que deben orientar su destino y el de la comunidad a cuyo destino está entrelazado el suyo propio. En ese marco, **“la versión del oráculo apropiado” termina justificando la autoridad y el mérito diferencial de los fallos de las instancias democráticas** sobre la base de que dichas instancias y sus correspondientes fallos se construyen sobre un fundamento totalmente saneado y a partir del **único punto de consenso unánime que ningún miembro estaría dispuesto a cuestionar**, a pesar de que sobre todos los demás asuntos se multipliquen las discrepancias.

-5.3.2. Si ahora retomamos el problema/desafío que tenemos entre manos en los términos formulados anteriormente en el numeral 5.1., no podemos dejar de recelar la presencia de ciertas fallas en la justificación que acabamos de esbozar. En efecto, si la dificultad a la que nos enfrentamos consiste en encontrar una fundamentación sólida para el carácter vinculante de los fallos democráticos, de modo que resulte posible exigir acatamiento y colaboración leal aún a aquellos que discrepan con el contenido de dichos fallos, y si las discrepancias y el pluralismo de creencias y convicciones están asociados indisolublemente a los compromisos

normativos asumidos por las instituciones democráticas, entonces, ¿cómo es que tal dificultad puede ser tan trivialmente superada y cómo es que podemos identificar tan fácilmente un punto de consenso ineludible hasta para los menos dispuestos a compartir las creencias y convicciones de los demás? Y todavía, extremando nuestros escrúpulos, ¿no incurrimos en una modalidad de círculo vicioso al intentar justificar la autoridad normativa de las instituciones democráticas apelando al resultado de un mecanismo de consulta identificado con tales instituciones y edificado sobre la vigencia de sus mismos compromisos normativos?

En realidad, sólo hemos introducido esta última disquisición para identificar los límites dentro de los cuales nos hemos estado moviendo al considerar el vínculo de la comunidad democrática con quienes discrepan con sus fallos. Y es que, en efecto, al argumentar sobre la base del principio de igualdad política ya hemos dejado afuera a todos aquellos interlocutores que no reconocen la validez de tal principio. Entre tales interlocutores se ubican, por ejemplo, todos aquellos que adhieren a los compromisos normativos consagrados en la Constitución de la República Islámica de Irán, según la cual la autoridad en esa comunidad se ejerce “sobre la base de la fe en los siguientes puntos...en la revelación divina y en su papel fundamental en la explicación de las leyes...en el imanato y en el liderazgo permanente y en su papel fundamental en revolución del Islam”. Y como es obvio, el lugar autorizado reservado para los pronunciamientos del Consejo de los ayatolas en el sistema institucional iraní es incompatible con el principio de igualdad política.

Ahora bien, una vez aprendida la lección sobre los límites de aplicación válida del tipo de argumentaciones que solemos manejar, podemos restringir el círculo de nuestros interlocutores habilitados a discurrir sobre las instituciones democráticas a aquellos que asumen el principio de igualdad política. En este contexto específico, la asunción de tal principio implica sostener que el ejercicio legítimo de la autoridad institucional tiene como condición habilitante el reconocimiento de que todos los miembros de la comunidad a la cual pretende aplicarse dicha autoridad pueden reivindicar para sí el mismo estatuto de dignidad e idoneidad moral y que, por lo tanto, pueden exigir que se atribuya a sus creencias y convicciones el mismo grado de pertinencia y relevancia.

En todo caso, aún pagando los altos costos de esa restricción de su ámbito de validez, la justificación que hemos asociado con “la versión del oráculo saneado” sigue estando expuesta a deficiencias insubsanables. En efecto, hay una distancia infinita a recorrer entre el reconocimiento del principio abstracto de igualdad moral y cívica, en un extremo y, en el otro, la especificación de las reglas y los procedimientos institucionales a los que deben ajustarse las instancias democráticas de elaboración y sanción de fallos autorizados para cumplir con las exigencias isegóricas e isonómicas, es decir, para garantizar a todos los miembros igualdad de oportunidades de incidir en el contenido de dichos fallos e igualdad de consideración –“equal concern”- para sus intereses y destinos. Y por cierto sería absurdo suponer que todos los formatos institucionales son equivalentes entre sí, que todos ofrecen el mismo nivel de garantías y de legitimidad democrática. Más aún, como lo ha señalado Jeremy Waldron, si debemos estar dispuestos a conjugar las instancias democráticas en un marco de discrepancias inzanjables en torno a los contenidos sustantivos y los alcances del interés público, ¿por qué no estaríamos expuestos a incurrir en el mismo nivel de discrepancias –tan difíciles de dilucidar en los cortos y medianos plazos- cuando lo que está en juego son cuestiones de procedimientos y de garantías? Y dando un paso más aún, todo indica que los dos tipos de discrepancias, las sustantivas y las procedimentales, tienden a acumularse y a potenciarse entre sí, reforzando así la postura de quienes disienten con los fallos, se consideran agraviados por la menguada audiencia otorgada por los demás a sus iniciativas y a sus vetos y, por lo mismo, no se consideran obligados a acatarlos y colaborar lealmente con su aplicación cabal.

Por último, cabe agregar un nuevo ítem al repertorio de insolvencias en las que incurren este tipo particular de estrategias de justificación que hemos venido examinando. En efecto, si nos manejamos exclusivamente con componentes intrínsecos, estrictamente procedimentales, no disponemos de criterios para resolver el problema de los límites de la “constituency”, es decir, para especificar quiénes deben ser consultados y están habilitados para incidir en la determinación de los contenidos de los fallos, y quiénes deben ser excluidos de tales consultas. Por su propia naturaleza, se trata de una cuestión que no puede ser resuelta mediante un mecanismo de consulta -apelando al oráculo apropiado- sin incurrir en una petición de principio, es decir, sin dar por resuelto aquello mismo que está en discusión.

-5.4. Las estrategias de justificación basadas en méritos o rendimientos extrínsecos.

Al iniciar este numeral (5) esbozamos una alternativa simplificada entre dos estrategias polares de justificación de la autoridad normativa de los fallos de las instituciones democráticas. Acabamos de completar un primer recorrido en torno a aquellas fundamentaciones que apelan a las virtudes o valores intrínsecos al ejercicio de

dichas instituciones y nos resta abordar aquellas otras fundamentaciones alternativas que apelan **virtudes y valores extrínsecos a dichas instituciones, es decir, que se localizan en los resultados promovidos o los rendimientos obtenibles a partir de su aplicación sistemática.** En principio, se nos ocurren tres tipos de resultados valiosos o de rendimientos deseables que podrían alegarse como razón para recomendar el recurso a las prácticas democráticas, según que las mismas nos permitieran o nos capacitaran para:

-a) **identificar las respuestas apropiadas a los problemas que integran la agenda pública y los contenidos del interés público,** lo que nos autorizaría a atribuir a las prácticas democráticas virtudes o **rendimientos epistémicos.**

-b) **proteger y/o promover los derechos y las libertades de los ciudadanos, así como estimular directa e indirectamente a los gobiernos a adoptar aquellos fallos y orientaciones que redundan en mejoras de las condiciones de vida, de la seguridad y de la salud de la población, preservación del medio ambiente, etc.,** lo que nos autorizaría a atribuir a las prácticas democráticas **rendimientos teleológicos;**

-c) en línea con lo anterior y en términos más específicos, mejorar la atención a los intereses y destinos de los sectores más indefensos y desaventajados, otorgándoles mayores audiencia y gravitación a sus reclamos, es decir, **aquel tipo de rendimientos que Amartya Sen atribuyó al funcionamiento pleno de las instituciones democráticas, asociándolas con una mayor sensibilidad y con respuestas más urgentes ante situaciones extremas de hambrunas y calamidades;**

-d) cultivar y consolidar **ciertas virtudes y disposiciones morales e intelectuales intrínsecamente valiosas** tales como el respeto recíproco, el concernimiento solidario con los destinos y los intereses de los demás miembros, la amplitud de miras que se traduce en atender y tener en cuenta testimonios divergentes y experiencias no familiares, la deliberación reflexiva en el marco de un intercambio sistemático de elementos de juicio compartibles, etc.

Antes de señalar las inconsistencias insoslayables en las que incurren estas estrategias que apelan a rendimientos extrínsecos para justificar la autoridad normativa de las instituciones democráticas, es preciso adelantarse a descartar la variante reseñada en el literal d). Más allá de si es cierto o no que el ejercicio sistemático de las prácticas democráticas resulta un medio eficaz para cultivar y consolidar las mencionadas disposiciones, lo cierto es que tales logros no pueden ser esgrimidos como un motivo apropiado para adoptar tales prácticas. Parafraseando a Jon Elster, así como nadie se dedicaría al ajedrez si el juego careciera del más mínimo atractivo, por más que se le asegurara el cultivo de ciertas capacidades de cálculo y análisis, del mismo modo, ningún pueblo asumiría instituciones democráticas si no considerara que las mismas configuran la forma más apropiada de gobernarse, si el único rendimiento obtenible fuera el cultivo de ciertas disposiciones y si, además, tales disposiciones fueran cultivables mediante la práctica de otras actividades intrínsecamente valiosas. Así, pues, para que las instituciones democráticas arraiguen y maduren es preciso que los ciudadanos se involucren en ellas para obtener otro tipo de rendimientos o en prosecución de otro tipo de objetivos.

Podemos, pues, descartar la variante de justificación (d) que apela a los supuestos rendimientos colaterales virtuosos. Si pasamos al resto de las variantes mencionadas, ¿cuál es el flanco que las torna tan extremadamente vulnerables a la crítica? No es preciso esforzarse mucho para identificarlo. En efecto, si el desafío/problema a resolver es especificar qué razones podrían ser invocadas para convencer a quienes discrepan con el contenido de los fallos democráticos que deben estar dispuestos a acatarlos y a colaborar lealmente en su aplicación, entonces, resulta absurdo apelar a supuestos consensos unánimes sobre las prioridades que deberían guiar el ejercicio de la autoridad institucional y los objetivos que deberían ser promovidos -los contenidos y los ordenamientos de los derechos y las libertades, las mejoras en las condiciones de vida, etc.- ya que tal apelación, no sólo no deja lugar para el planteamiento de discrepancias, si no que, además, da por resueltos aquellos mismos asuntos -incluidos en la agenda pública de cualquier comunidad democrática- en torno a los cuales se suscitan controversias sustantivas mucho más difíciles de zanjar que las de índole estrictamente procedural. Y por cierto, las cosas no mejoran si para justificar la autoridad normativa de los fallos democráticos se propone componer una sumatoria de virtudes intrínsecas y de rendimientos extrínsecos.

-5.5. Una mirada más amplia al conjunto de opciones de justificación disponibles.

En principio, podríamos dar agotado el análisis de las versiones más frecuentadas de las dos estrategias alternativas de justificación. Nuestros objetivos centrales, analizar en trazos gruesos cómo se configura esa falsa alternativa entre las justificaciones “intrínsecas” y “extrínsecas”, así como demostrar que en este terreno nuestras tradiciones democráticas profanas adolecen de insolvencias notorias, han sido cumplidos. Con todo,

otras opciones con notorios prestigios ni siquiera han sido mencionadas y, además, no hemos explorado algunos alcances de la **diferenciación entre los rendimientos epistémicos y los rendimientos de eficacia**.

Es preciso, pues, indagar las posibilidades de identificar, **además del eje de diferenciación que enfrenta a las justificaciones intrínsecas o procedurales, por un lado y, por el otro, a las justificaciones extrínsecas o sustantivas, algunos otros ejes de diferenciación**, para lo cual tenemos que incursionar más allá de las propuestas profanas más frecuentadas y buscar guía e inspiración en algunos de los aportes especializados mejor acreditados en el terreno de la Filosofía Política. Por lo pronto, Rawls propone que empecemos por distinguir entre aquellas **modalidades de adjudicación estrictamente procedimentales** –“pure procedural justice”- en las que el resultado se legitima por la mera aplicación garantizada de un procedimiento que no discrimina a favor o en contra de alguno de los reclamantes, por un lado y, por el otro, **aquellas modalidades de adjudicación cuyos resultados sólo pueden resultar legitimados si se ajustan a principios sustantivos independientes de los procedimientos**. El sorteo ilustra a las primeras modalidades de adjudicación y a la legitimación específica del fallo que se asocia al primer tipo de adjudicación. En efecto, la legitimidad del fallo no depende de las virtudes o méritos que exhiba el adjudicatario, sino del cumplimiento estricto de las condiciones exigidas por el procedimiento: los participantes han aceptado de antemano la instancia del sorteo y el mecanismo utilizado otorga a todos los participantes iguales probabilidades ex-ante de resultar ganadores.

En segundo lugar, entre las modalidades de adjudicación no estrictamente procedurales, Rawls distingue entre **aquellas que pueden asegurar un resultado correcto mediante la aplicación de un determinado procedimiento** –“perfect procedural justice”- por un lado y, por el otro, aquellas en las que aún cuando se cumplan los procedimientos más cuidadosos y las garantías más exigentes para evitar distorsiones o desviaciones, no es posible asegurar que el resultado sea correcto (“imperfect procedural justice”). Por cierto, Rawls se adelanta a señalar que cuando se trata de adjudicaciones en las que hay en juego intereses relevantes no disponemos de procedimientos cuyos resultados sean infalibles o que no puedan ser cuestionados a la luz de nuevos elementos de juicio, e ilustra **los procedimientos infalibles de adjudicación** mediante la fórmula diseñada para dividir en porciones iguales una torta: el participante que la divide se le adjudica el último trozo restante, después que los demás participantes hayan retirado cada uno su trozo, asegurando así aquel resultado que se presume como justo, es decir, un división en trozos iguales. Además, ilustra a las **modalidades de adjudicación falibles con los procedimientos que regulan los juicios criminales**. Tales procedimientos están diseñados para otorgar las máximas garantías a los acusados, de modo que éstos solo sean declarados culpables en el caso de no existan dudas razonables sobre su responsabilidad en la comisión de la ofensa que se les atribuye. Sin embargo, a pesar de que se cumplan todos los extremos previstos y se multipliquen los cuidados en las actuaciones judiciales, no se puede evitar que en algunos casos un inocente sea reputado culpable.

Ahora bien, a partir de esas distinciones que establece Rawls entre las tres modalidades de adjudicación, ¿es posible extraer algunas pistas esclarecedoras en torno a las distintas estrategias disponibles para legitimar la autoridad normativa de los fallos democráticos? A primera vista, la respuesta debería ser negativa. Por lo pronto, los asuntos que se dirimen en los juicios criminales pertenecen a un género muy diferente a los que integran la agenda pública de una comunidad democrática y, por lo mismo, los elementos de juicio apelables en un caso no pueden ser utilizados pertinentemente en el restante. En efecto, mientras que en los juicios criminales se trata de reconstruir con la mayor veracidad posible ciertas cadenas de acontecimientos y protagonismos que desembocaron en una ocurrencia delictiva, es decir, que se trata de indagar en hechos del pasado, en cambio, cuando nos enfrentamos a un tema de la agenda pública se trata de optar entre distintas líneas de acción para el futuro y en la opción gravitan consideraciones normativas y juicios de valor acerca de los tipos de libertades y de intereses que están en juego. En segundo lugar, el tipo de fallo que resulta de una instancia de adjudicación por sorteo parece completamente inapropiado para dirimir las cuestiones de interés público, ya que la apelación a un mecanismo aleatorio no permite que graviten aquellas consideraciones específicamente relacionadas con los factores y circunstancias propios de cada uno de los asuntos contenciosos planteados. Por último y como ya señalamos, el propio Rawls se adelanta a descartar la posibilidad de encontrar procedimientos de adjudicación infalibles –como el ilustrado en la división de la torta- para dirimir los problemas que integran la agenda pública.

Con todo, esa primera respuesta negativa puede ser rectificada si en vez de atender al detalle de **los mecanismos o procedimientos de adjudicación analizados por Rawls**, nos centramos, en cambio, en **los modelos de legitimación de los fallos asociados a los mismos** y, en particular, si rastreamos en dichos modelos algunas indicaciones aplicables rendidoramente a las estrategias de fundamentación de las instituciones democráticas. En primer lugar, los tres procedimientos de adjudicación analizados sólo pueden

asociarse con méritos epistémicos, es decir, por la identificación del contenido de los fallos; dicho en términos negativos: ninguno de ellos puede vincularse con legitimaciones que apelen a los efectos desencadenados por el funcionamiento de las instituciones democráticas. En segundo lugar, podemos rastrear un eje de diferenciación distintos a los que hemos esbozado previamente: la convalidación epistémica del contenido del fallo puede ofrecer dos tipos de garantías:

- a) estrictamente procedurales, en cuyo caso no es necesario ni tendría sentido comparar el resultado con alguna otra instancia exógena al procedimiento, alcanza con asegurar que el mecanismo aplicado está saneado, no contiene sesgos ni está afectado por interferencias distorsionantes;
- b) confirmaciones independientes mediante la consulta a una instancia exógena al procedimiento.

-5.6. El procedimiento del sorteo saneado y las legitimaciones contractualistas de la autoridad de los fallos democráticos.

Y bien, dentro de las tradiciones doctrinarias acumuladas en torno a la fundamentación de los fallos democráticos, ¿hay alguna variante que admita cierto parentesco ilustrativo con el modelo de legitimación estrictamente procedural? Si tomamos como rasgo decisivo la imposibilidad de consultar a una instancia exógena para convalidar el fallo, entonces podemos **asociar algunas de las modalidades –las más extremas- de fundamentaciones contractualistas –Rousseau, Kant y Habermas- con dicho modelo de legitimación estrictamente procedural**. El rasgo común es que en ambos casos el **título convalidante lo otorga la instancia saneada de donde proviene, el fallo, es decir, la instancia específicamente habilitada como fuente u origen del contenido de dicho fallo**. Así, como el resultado del procedimiento elegido para el sorteo legitima el resultado, de manera similar la consulta a la fuente habilitada –por ejemplo, la voluntad general en el caso de Rousseau, la instancia de comunicación no distorsionada o la comunidad ideal de habla, en el caso de Habermas- determina el contenido de las disposiciones que todos los miembros de la comunidad deben acatar. Así, pues, el tipo de requisito que se exige en ambos casos para convalidar el resultado es de índole interna y se cumple con él mediante la eliminación exhaustiva de todas las distorsiones posibles: en el caso del procedimiento de sorteo comprobando que el mecanismo opera en forma estrictamente aleatoria y en el caso del agente consultado, comprobando que el proceso de elaboración del fallo no está expuesto a interferencias, que no está condicionado, por ejemplo, por intereses particulares o por los impactos resultantes de correlaciones asimétricas de recursos coercitivos. Por otra parte, en ambos casos la legitimación del fallo deriva, en último término, de que los agentes involucrados han establecido de antemano su disposición a aceptar como válido el resultado de la instancia consultada. Así ocurre en el caso del sorteo, en la medida en que los que intervienen han acordado las reglas y el procedimiento que determinarán el resultado. De manera similar, en la fundamentación contractualista de la autoridad institucional, el compromiso que asumen los ciudadanos de reconocer como valederos los fallos que emanan directa o indirectamente de la instancia institucionalmente habilitada, tiene como contrapartida el compromiso compartido según el cual dicha instancia sólo puede asumir y ejercer tal autoridad si en cada ocasión demuestra y ofrece garantías inequívocas de operar para proteger incondicionalmente la libertad y la dignidad de sus miembros, es decir, si cumple con las finalidades y las condiciones previamente acordadas.

Ahora bien, aquellas fundamentaciones contractualistas que hemos emparentado con el modelo rawlsiano de adjudicación estrictamente procedural –por cuanto no admiten instancias externas de convalidación del contenido de los fallos- incurrir en insolencias insubsanables. Por un lado, al intentar legitimar la obligación de acatar los fallos apelando a la autoridad de la fuente de donde emanan, se alinean con aquellas teorías que justifican nuestros imperativos morales a partir del respeto debido al legislador supremo y se exponen a los mismos tipos de críticas adelantadas por Platón y retomadas por Dworkin en relación con las modernas formulaciones contractualistas. Tales críticas consisten en denunciar el carácter incompleto y vicioso de la estrategia de fundamentación en cuestión, ya que una de las dos, o bien obedezco al legislador por temor a su castigo y entonces mi acatamiento carece de fundamentos morales, o bien lo obedezco porque tengo buenas razones para atribuirle autoridad y para considerar sus mandatos como apropiados. Sólo que en éste último caso, tales razones deben ser especificadas independientemente de su relación con la fuente de autoridad y convalidadas por una instancia exógena, tareas para las cuales la estrategia contractualista no sólo no ofrece recursos, sino a las que trata de eludir, en la medida en que para cumplirlas sería preciso respaldarse en consensos tan problemáticos como esquivos sobre asuntos sustantivos, al margen de los acuerdos procedurales. En todo

caso, como veremos más adelante, hay ciertos componentes rescatables en esta primera estrategia de legitimación.

Por otro lado, algunas de las fundamentaciones contractualistas más recientes optan por legitimar a las instituciones democráticas en el entendido de que las mismas constituyen las mejores aproximaciones disponibles y siempre autoperfeccionables a aquellas instancias saneadas que, en condiciones ideales, garantizarían procesos de depuración reflexiva de las creencias, convicciones e intereses en juego. Solo que en estas versiones, la autoridad de los fallos derivaría de los rendimientos epistémicos atribuidos a las instituciones democráticas y, por lo tanto, esta justificación no podría asociarse con el modelo de adjudicación estrictamente procedual (“*pure procedural justice*”).

-5.7. El procedimiento que asegura la división de la torta en trozos iguales y las fundamentaciones basadas en los rendimientos epistémicos de las instituciones democráticas.

Como ya hemos señalado, para Rawls, el segundo tipo de procedimientos de adjudicación que analiza, a los que considera como ejemplificaciones de lo que él designa “perfect procedural justice” e ilustra a través de la “receta infalible” para dividir una torta en partes iguales, sólo es aplicable en casos triviales y no sirve para resolver la índole de asuntos que figuran en la agenda pública. Tal conclusión es ineludible en la medida en que **ningún protocolo de procedimientos garantiza resultados epistémicos incuestionables**, ni siquiera en el terreno de las denominadas “ciencias exactas”. Con todo, las cosas cambian si en vez de apuntar a la infalibilidad, nos contentamos con rendimientos epistémicos parciales. Eso sí, al rebajar las exigencias de acierto epistémico de los procedimientos e instancias democráticas, ya estamos incursionando en el tercero de los modelos de adjudicación analizados por Rawls, en el terreno de las instancias de “*imperfect procedural justice*” y más adelante se comprenderán las razones de este adelantamiento. Precisamente, algunos autores han procurado justificar la autoridad de los fallos de las instituciones democráticas, atribuyéndole a los resultados de los asuntos procesados con arreglo a procedimientos y exigencias asociados con tales instituciones ciertas virtudes o garantías de índole epistémica. No es fácil abarcar a todos esos aportes ni evaluarlas en conjunto, por cuanto sus argumentaciones son muy divergentes. Así, por ejemplo, para **Condorcet** la consulta a la opinión de **un número muy grande de testigos independientes aumenta la probabilidad –en proporción al tamaño del universo de testigos consultados- de que los resultados se acumulen en torno al resultado acertado**. A su vez, para **David Easton** el **carácter público de los intercambios y las contrastaciones de los elementos de juicio disponibles para dilucidar un asunto opera a modo de un filtro correctivo** y permite concluir que las instituciones democráticas reservan “un amplio lugar para la verdad”.

La propuesta de **Habermas** amerita un capítulo aparte, por cuanto se sitúa a mitad de camino. En efecto, **contiene elementos propios de las estrategias contractualistas de justificación**, ya analizadas, a la vez que **apela a los supuestos rendimientos epistémicos de las instituciones democráticas** -al menos en sus mejores conjugaciones posibles- **y atribuye a tales rendimientos epistémicos alcances mucho más ambiciosos que los reconocidos por Condorcet y Easton**. En ese sentido, cabe señalar que dicha reivindicación de las virtudes epistémicas de los fallos democráticos ajusta a la perfección con un marco conceptual como el habermasiano en el que se **atribuyen pretensiones cognitivas a los juicios normativos**. En particular, Habermas pone el acento en las virtudes correctivas de las instancias públicas de deliberación saneadas de distorsiones e interferencias y considera que las prácticas democráticas, en la medida en que constituyen aproximaciones perfectibles a ese tipo de instancias, promueven y facilitan la depuración reflexiva de aquellas pretensiones que no pueden ser defendidas públicamente.

Con todo, el componente contractualista no puede ser dejado de lado. En efecto, para Habermas, la deliberación pública, al margen de sus eventuales rendimientos epistémicos tiene la virtud de aproximar a las instancias democráticas a “las condiciones saneadas de una comunicación no distorsionada”, a “una situación ideal de habla” –expurgada de coerciones y temores, así como de sesgos discriminatorios-, es decir, a un nosotros ciudadano saneado y, por lo mismo, habilitado para legislar, al igual que la voluntad general rousseauiana en representación de los intereses universalizables de todos sus miembros. No estoy seguro si para Habermas -o en su marco conceptual- tiene sentido o no plantearse la pregunta acerca de cuál es la prioritaria de las dos fuentes de legitimación de los fallos de las instancias deliberativas “saneadas”, es decir, si lo decisivo son los rendimientos epistémicos de tales instancias –en cuyo caso, debería ser posible apelar a una fuente exógena de convalidación de los supuestos méritos o aciertos epistémicos- o si, por el contrario, lo decisivo es el carácter “saneado” del nosotros que legisla, en cuyo caso y tal como ocurre en el caso de Rousseau, no sería posible

evaluar el acierto de dichos fallos a la luz de elementos de juicio provenientes de una fuente alternativa. En mor de la honestidad, debo confesar que son muy menguados tanto mi familiaridad como mi interés por el pensamiento y la obra de Habermas. Por otra parte, como considero que las dos vertientes, tanto la “epistémica” como la “contractualista” conducen a callejones sin salida, puedo dejar de lado el punto y limitarse a identificar las deficiencias específicas de cada una de esas estrategias de justificación.

Ya hemos señalado, en términos generales, las deficiencias insubsanables de las estrategias contractualistas. En lo atinente a la propuesta específicamente habermasiana, su apelación a las condiciones “saneadas” de la instancia que asume la habilitación para legislar constituye una maniobra pueril que desemboca en un callejón sin salida. En efecto, para reivindicar su autoridad frente a quienes discrepan con sus fallos o se muestran renuentes a acatar, la instancia legislativa sólo puede esgrimir como argumento sus propios títulos de saneamiento, es decir, un recurso que no sólo es ad hominem, si no que al ser usado obliga a descalificar a los testimonios de los discrepantes y de los disidentes como contaminados por factores distorsionantes tales como sesgos sectarios, intereses facciosos, temores, etc. Planteados en esos términos, cualquier contencioso sobre la autoridad de de los fallos democráticos termina siendo indirimible: cada una de las partes del contencioso sólo puede reivindicar su propia condición de instancia saneada de juicio y cuestionar a la condición de la restante, pero no disponen de ninguna referencia públicamente escrutable para convalidar sus respectivas pretensiones. Y para peor, el mero uso de esa estrategia de justificación implica asumir ciertos supuestos que no dejan lugar para las discrepancias legítimas, en particular, el supuesto según el cual dos agentes racionales, provistos de la misma información sobre los asuntos o problemas que tienen entre manos y igualmente dispuestos a buscar la respuesta pertinente, tienen que terminar compartiendo las mismas conclusiones, de modo que si hay divergencias, entonces, se puede presumir que el juicio de alguno de ellos está necesariamente contaminado por factores distorsionantes.

Por otra parte, toda la propuesta del saneamiento de la instancia legislativa mediante la expurgación de las fuentes de distorsión constituye un despropósito tan mayúsculo como aquel que ilustraba el recurso utilizado por el Barón de Munchausen para salir de un pantano en el que se había hundido: izarse tironeando hacia arriba sus propios cabellos. En efecto, no sólo es imposible agotar el repertorio de las fuentes posibles de distorsión del juicio y así asegurar que podemos descartar sus impactos, sino que la propuesta de la autoindagación colide con la saludable inescrutabilidad de nuestros propios procesos de elaboración de creencias y convicciones. hemos

En cuanto a las dificultades que enfrentan las justificaciones epistémicas, por lo pronto, resulta sumamente **cuestionable la pertinencia de atribuir un valor de verdad a los fallos institucionales** y, en todo caso, no resulta claro qué queremos decir al afirmar, por ejemplo, que una legislación sobre el aborto o el consumo de drogas es “verdadera”. En segundo lugar, para que esa atribución –suponiendo que la misma tuviera un sentido identificable y consistente- pudiera agregar un mérito comprobable a los fallos, sería necesario disponer de alguna instancia de validación exógena a las instituciones democráticas, a partir de la cual estaríamos en condiciones de dictaminar el grado de verdad o de falsedad de dichos fallos. Sólo que de esa manera, **al intentar “reservar un lugar para la verdad”** –aquí parafraseo a David Easton- en las prácticas democráticas y en la justificación de su autoridad, incurriríamos en el mismo tipo de violación de los compromisos morales básicos asociados a las instituciones democráticas que comete la actual constitución iraní: **no reservaríamos un lugar disponible para las discrepancias legítimas y a los disidentes como fuentes de testimonios irremplazables y, por el contrario, impondríamos de antemano una fuente incuestionable de evidencias.** Y por cierto, las cosas no se arreglan si optáramos por considerar a los conocimientos científicamente acreditados como la instancia exógena de validación de los fallos, ya que efectivamente si la ciencia estuviera en condiciones de proporcionar respuestas infalibles o suficientemente garantizadas a los problemas que integran la agenda pública, entonces, ¿para qué recurriríamos a las instituciones democráticas? En tercer lugar, por último, si optamos por descartar como un mero despiste y una confusión categorial a cualquier intento de atribuir valor de verdad a los fallos democráticos, y si concluimos que sólo corresponde evaluarlos en términos de “justos o injustos”, “apropiados o inapropiados”, “convenientes o inconvenientes”, “beneficiosos o perjudiciales”, e insistiéramos en atribuir méritos epistémicos a las prácticas democráticas, en ese caso estaríamos obligados a asegurar que no sólo disponemos de una instancia exógena de validación de los aciertos y los desaciertos de dichos fallos en los términos antes señalados, si no que, además, tal instancia resulta trivialmente accesible y que todos los miembros de la comunidad están dispuestos a aceptar como incuestionables los veredictos resultantes de la consulta esa misma instancia. Sólo que en un marco como el que acabamos de trazar, todos los problemas y las discrepancias sustanciables en torno al contenido y los alcances

del interés público estarían resueltos de antemano y al margen de las instancias propiamente democráticas, de modo que sólo quedarían pendientes cuestiones de índole instrumental y de gestión, para resolver las cuales el mejor procedimiento consistiría en seleccionar en base a antecedentes y méritos acumulados a los expertos y especialistas encargados de proporcionar las mejores respuestas. Y por cierto, también en este caso nos estaríamos alineando con el modelo institucional iraní y no habríamos dejado margen alguno para las discrepancias legítimas.

Y bien, a pesar de todos los señalamientos críticos que hemos acumulado contra ambos modelos de justificación de la autoridad de las instituciones democráticas, tanto los basados en el enfoque contractualista como el que apela a los rendimientos epistémicos, es preciso adelantarnos a reconocer que en dichos modelos es posible identificar componentes o aspectos rescatables. Por lo mismo, en la segunda parte de este trabajo, al abocarnos a la construcción de una respuesta alternativa a las fundamentaciones intrínsecas y extrínsecas tradicionales, nos preocuparemos de destacar hasta qué punto dicha alternativa se esmera en incorporar y en reformular los aciertos parciales de los enfoques tradicionales. En cuanto al **acuerdo parcial de los enfoques contractualistas**, el mismo residiría, como veremos más adelante, en su exigencia de que la autoridad de las instituciones democráticas resulte condicionada a su capacidad de **anudar y conjugar un involucramiento inequívoco entre dicha autoridad, por un lado y, por el otro, la disposición potencial de los ciudadanos a asumir responsabilidades compartidas, tanto en la determinación de los fines que orientan el ejercicio de dicha autoridad, como en el control de su ejercicio**. Y en cuanto al **acuerdo parcial de los enfoques epistémicos**, el mismo consistiría en asumir que los fallos democráticos, si bien es cierto que no pueden ser confirmados o respaldados inequívocamente por los cursos de acontecimientos desencadenados, por las conductas y disposiciones promovidas, a partir de la vigencia de dichos fallos, ni tampoco refutados definitivamente por aquellos nuevos elementos de juicio que sus aplicaciones sistemáticas pongan a luz, también es cierto, sin embargo, que

-a) **su pertinencia y su confiabilidad como orientaciones prácticas no pueden ni deber ser inmunizadas a las contrastaciones negativas**, a la acumulación sistemática de los desaciertos y los fracasos de aquellas premisas colaterales que les sirven a modo de diagnósticos de los problemas a resolver y de pronósticos de los cursos alternativos esperables en función de las medidas que se adopten;

-b) algunas de las garantías y exigencias que deben cumplir las instancias democráticas de elaboración y sanción de los fallos operan a modo de filtros correctivos que detectan premisas falsas y lagunas de información en las propuestas inicialmente presentadas.

-5.8. Las garantías del “debido proceso” en los juicios criminales como guía inspiradora para justificar la autoridad de los fallos democráticos.

-5.8.1. En principio, se supone que los ciudadanos de una comunidad organizada democráticamente deben estar dispuestos a acatar las sentencias de los tribunales encargados de aplicar la ley a los casos particulares. Es cierto que están habilitados para discrepar públicamente con el acierto de cada uno de los fallos y que disponen de instancias debidamente acondicionadas de alzada para apelar contra ellos y obligar a un proceso de revisión de todo lo actuado al respecto, pero aún en esos casos extremos están comprometidos a reconocer la autoridad de los tribunales y del sistema judicial en su conjunto. En particular, en los casos de juicios criminales, las consecuencias para los acusados y para sus allegados pueden llegar a ser muy graves y dolorosas en la medida en que están expuestos a ser condenados a sanciones que implican, por ejemplo, la reclusión carcelaria y la pérdida de algunos de sus derechos ciudadanos, especialmente el de participar en las instancias electorales, y todo ello por períodos muy prolongados.

Ahora bien, como señala Rawls los tribunales judiciales no son infalibles, por lo que en algunos casos, después que los acusados soportaron durante muchos años ese tipo de sanciones extremas, se encuentran nuevas evidencias que terminan demostrando su inocencia y que obligan a los tribunales a liberarlos y a reparar, dentro de lo posible, los errores cometidos y las penas infligidas. (O el caso inverso: la nueva evidencia disponible viene a demostrar, después de muchos años, la culpabilidad del acusado que fue declarado inocente, sólo que éste ya ha fallecido y no es posible hacerle responder por su crimen). Y la pregunta que debemos hacernos es por qué tales casos no invalidan la autoridad de los fallos de los tribunales judiciales o, en términos más precisos, **cuáles son las virtudes o los méritos atribuibles a los procedimientos aplicados en esas instancias que justifican nuestro compromiso de respetar su autoridad para enjuiciarnos, aún reconociendo que pueden incurrir en errores similares a los que acabamos de especificar y aún en aquellos casos en los que**

las personas directamente involucradas y directamente familiarizadas con las conductas juzgadas y con las circunstancias en las que ocurrieron dichas conductas, disponen de elementos de juicio incompatibles con las sentencias emitidas.

La respuesta más frecuentada a esa demanda de justificación consiste en que sólo corresponde reivindicar la autoridad de los fallos judiciales en aquellos casos en que los tribunales actuantes han asumido procedimientos ajustados estrictamente a lo que en la jerga especializada de los juristas se denomina como “*las exigencias del debido proceso*”. Ahora bien, ¿cómo se traducen tales exigencias en términos profanos? O en términos más precisos, ¿cuáles serían las virtudes o los méritos atribuibles a los procedimientos judiciales que cumplen las exigencias del debido proceso que los ciudadanos deben estar dispuestos a respetar, incluso aquellos que se consideran condenados por una sentencia errónea? A mi juicio aquí cabe distinguir dos tipos de méritos o virtudes.

-i) En primer lugar, las exigencias del debido proceso **garantizan a los acusados**

-a) el trato más respetuoso posible a su integridad y dignidad moral;

-b) el acceso al asesoramiento adecuado y a todas fuentes y oportunidades de recabar la información requerida para defender su inocencia o para alegar circunstancias y condiciones eximentes de su culpabilidad;

-c) condiciones asimétricas con respecto a la carga de la prueba que los favorecen, exonerándolos de probar su inocencia y, por el contrario, **obligando a la parte acusadora a probar la culpabilidad denunciada “más allá de cualquier duda razonable”**. Esto implica que la comunidad representada por la instancia judicial está dispuesta a soportar que algunos de sus miembros culpables de haber cometido delitos resulten declarados inocentes –en aquellos casos en los que la acumulación abrumadora de convicciones no logra contrarrestar un resquicio mínimo de incertidumbre- antes de correr el riesgo de que algunos de sus miembros resulten condenados como culpables de delitos que no cometieron.

Ahora bien, si aplicamos aquellas distinciones que hemos venido utilizando desde el inicio de esta sección (5), entre justificaciones de los fallos democráticos en base a méritos o valores intrínsecos, por un lado y, por el otro, a méritos o valores extrínsecos, entonces, corresponde ubicar la apelación a este tipo de garantías y condiciones favorables otorgadas a los acusados que acabamos de especificar como un **caso inequívoco de justificación en base a méritos o valores intrínsecos a las prácticas democráticas**. En particular, aquellas instancias judiciales que cumplen con las exigencias del debido proceso pueden exhibir títulos saneados de autoridad democrática en la medida en que **sus actuaciones se ajustan estrictamente a las exigencias del principio de la isonomía, constitutivo de las instituciones democráticas**.

-ii) En segundo lugar, parece razonable afirmar que el cumplimiento estricto de las **exigencias y garantías del debido proceso asegura ciertos rendimientos epistémicos**. En efecto, todo indica que aquellas instancias judiciales que cumplen dichas exigencias están diseñadas de forma tal que los constreñimientos a los que están sometidas las actuaciones de ambas partes, la acusadora y la acusada, así como la contraposición de sus respectivos intereses, las responsabilidades y las prerrogativas atribuidas a los magistrados judiciales para dirigir y controlar los procedimientos, el carácter público y las facilidades de acceso de los ciudadanos y de los medios de prensa a todas las etapas del juicio criminal, etc., terminan configurando las condiciones más apropiadas para **maximizar las probabilidades de reunir toda la información pertinente y confiable acerca de las conductas juzgadas y las circunstancias asociadas**, lo que incluye, por ejemplo, el control cuidadoso de la veracidad de los distintos testimonios disponibles, el rastreo minucioso de todos los indicios materiales que podrían llegar a confirmar o refutar las informaciones y los testimonios recogidos, etc.

Como es obvio, **la apelación ese tipo de rendimientos epistémicos de los procedimientos judiciales es un caso notorio de justificación en base a méritos o virtudes extrínsecas de las prácticas democráticas**.

-5.8.2. Ahora bien, si las exigencias del debido proceso logran reunir esa combinación tan promisoriosa y peculiar de méritos intrínsecos y extrínsecos, ¿no sería posible reformular tales exigencias de modo tal que las mismas pudiera ser aplicables, ya no en forma restrictiva a los procedimientos y sentencias judiciales, sino en forma generalizada a todos los fallos democráticos y, en particular, al caso paradigmático –el que, además, resulta decisivo a los efectos de dilucidar la cuestión aquí planteada- de los fallos legislativos? Y en ese caso, si tal reformulación generalizada fuera posible, ¿no habríamos identificado por fin lo que estábamos buscando, es decir, las razones requeridas para justificar la vigencia de aquel imperativo que obliga a los ciudadanos de una

comunidad democrática a acatar sus fallos y a colaborar lealmente con su aplicación sistemática, aún en aquellos casos en que discrepen con el contenido de dichos fallos?

Antes de reseñar las propuestas más notorias de “readaptación” de las garantías del debido proceso a las instancias legislativas, considero oportuno adelantar las principales dificultades que esa operación debe enfrentar. En primer lugar, **la autoridad de las instancias y sentencias judiciales deriva, en último término, de la autoridad de las disposiciones legislativas**, por lo que no parece razonable apelar al tipo de compromisos asumidos a nivel de la instancia derivada para dar cuenta de las razones que justifican nuestro acatamiento a los fallos de aquella instancia que figura como fuente originaria de los imperativos. En ese sentido, corresponde recordar que **las prerrogativas, tanto de los magistrados judiciales, como de los titulares de los mandatos administrativos, están establecidas por disposiciones legislativas, que los primeros se limitan a aplicar dichas disposiciones a casos particulares**, y que las mismas otorgan a los segundos las habilitaciones (venias) y los recursos necesarios para contratar recursos humanos e insumos, a la vez que les fijan las finalidades y las orientaciones que enmarcan sus actuaciones. En segundo lugar, y como ya señalamos, el tipo de rendimientos epistémicos atribuibles a aquellas instancias judiciales que cumplen estrictamente las exigencias del debido proceso no parecen aplicables inequívocamente al nivel de las instancias legislativas, ya que mientras en el caso de las primeras los problemas principales a resolver son de índole fáctica –quién hizo qué y en cuales circunstancias– por lo que determinadas acumulaciones de testimonios confiables y de acontecimientos comprobados pueden terminar volcando el fallo en una u otra dirección, respaldando o desautorizando la culpabilidad atribuida al acusado, en cambio, en el caso de las segundas las premisas fácticas no juegan un papel tan decisivo, de modo que ninguna acumulación de evidencias puede llegar a confirmar o debilitar decisivamente la pertinencia de un fallo legislativo.

En todo caso, lo cierto es que **en el marco de las prácticas e instituciones democráticas estadounidenses esa reformulación de las exigencias del debido proceso para aplicarlas a las instancias de elaboración y sanción de las leyes se ha convertido en un recurso ampliamente frecuentado, aunque eso sí, no exento de controversias y discrepancias aún no zanjadas**. Así, por ejemplo, en dicho marco resulta habitual que una disposición legislativa resulte evaluada negativamente, acusada como deficitaria e incluso denunciada como incompatible con los principios constitucionales ante los tribunales de alzada, en razón de que en su proceso de elaboración no se habrían cumplido las garantías del debido proceso. Sólo que, como ya adelantamos, en ese mismo marco institucional no hay acuerdo unánime acerca de cuáles son los contenidos y los alcances de dichas garantías, ni acerca de cuáles son las implicaciones institucionales de que las instancias específicamente habilitadas para elaborar y sancionar fallos legislativos cumplan o no las mismas. En particular, **¿cuáles son aquellos requerimientos y constreñimientos diferenciales que debería observar un proceso legislativo para que corresponda afirmar que se ha ajustado a ese tipo de exigencias? Y en todo caso, ¿cuáles serían los títulos agregados de autoridad moral que aporta el cumplimiento de tales requerimientos para legitimar a un fallo legislativo, así como para justificar su acatamiento y la vigencia del imperativo de colaboración leal en su aplicación sistemática, incluso por parte de aquellos mismos ciudadanos que discrepan con su contenido, así como de quienes consideran que dicho fallo los trata en forma discriminatoria e incluso los agravia?**

-5.8.3. A los efectos de abarcar en forma resumida y con trazos gruesos el conjunto de **interpretaciones que, en el marco de las tradiciones democráticas estadounidenses, se han atribuido a la aplicación de “las garantías del debido proceso” a los procesos legislativos**, podemos distinguir entre i) **aquellas centradas en los aspectos sintácticos o procedimentales, así como en el principio de isegoría y en las exigencias de diversidad y pertinencia de las fuentes de elementos de juicios consultadas**, por un lado y, por el otro, ii) **aquellas que apelan a aspectos semánticos o sustantivos y al principio de isonomía**, entendido aquí como la exigencia de *“equal concern, respect and protection”*, es decir, de otorgar el mismo grado de relevancia y dignidad moral a los destinos y los intereses de cada uno de los ciudadanos.

-i) El primer tipo de propuestas interpretativas de los alcances de las garantías del debido proceso exige que los procesos legislativos sean muy cuidadosos en cuanto a las **oportunidades que brinda de audiencia y de incidencia a las distintas fuentes disponibles de informaciones, asesoramientos especializados y de testimonios profanos provenientes de personas o de núcleos civiles involucrados en los asuntos sobre los cuales se legisla**. En ese sentido, cabe distinguir entre dos fuentes de elementos de juicios que deben ser consultados y tenidos en cuenta.

-a) Por un lado, se trata de consultar a aquellas fuentes que podríamos llamar “expertas” o “especializadas”, entre las que se incluyen, por ejemplo, los estudiosos especializados en disciplinas afines a los asuntos sobre los que se legisla, los funcionarios familiarizados con la aplicación de programas estatales destinados a atender el tipo de problemas y/o situaciones que se trata de resolver o corregir mediante la legislación, las organizaciones de la sociedad civil que han demostrado interés y dedicación sostenida en ese terreno, los magistrados judiciales que han ejercido competencia en la materia, los juristas con versación especial acreditada, etc. A través del cumplimiento de esta exigencia, por lo pronto, se procura evitar que los protagonistas del proceso legislativo “reinventen la pólvora”, que presenten como novedosa una propuesta que ya está en marcha o, mucho peor, que intenten aplicar soluciones y medidas que fueron previamente dejadas de lado por desembocar en fracasos insoslayables y en efectos contraproducentes. En términos más generales, se trata de exponer los elementos de juicio profanos que manejan los titulares de los mandatos legislativos al filtro depurativo de los conocimientos y las experiencias sistemáticamente acumulados en determinados ámbitos de la comunidad ciudadana.

-b) Por otro lado, se trata de otorgar oportunidades diferenciales de audiencia y de incidencia en el proceso legislativo a todas aquellas personas y núcleos cívicos que por distintas razones –las profesiones y oficios que cultivan, los sectores de actividad en los que están insertos, las condiciones en las que viven, etc.- están directamente involucrados o pueden ser afectados por los impactos de las innovaciones legislativas propuestas. En particular, resulta decisivo el cuidado de otorgar las más amplias oportunidades de participar en las instancias de estudio y deliberación legislativas a los representantes y voceros acreditados de aquellos nucleamientos cívicos animados de “convicciones intensas” y propensos a discrepar con las orientaciones legislativas predominantes. A través del cumplimiento de estas exigencias, se procura exponer a las inquietudes reformistas a una confrontación con las acumulaciones más tradicionales y ampliamente arraigadas de “moral and civic common sense”, así como demostrar a quienes tienden a considerarse a sí mismos como excluidos de las corrientes principales de opiniones la disposición a no legislar a espaldas de ellos si no, por el contrario, a rescatar sus mejores aportes.

-ii) El segundo tipo de propuestas son mucho más ambiciosas en su interpretación de los alcances que corresponde atribuir a “las garantías del debido proceso”. Según estas propuestas, no alcanza con cumplir con los requerimientos del primer tipo, aplicables sólo a nivel de los procedimientos de las instancias de consulta, asesoramiento y deliberación legislativa, sino que **es preciso ir más allá y cumplir además requerimientos que se aplican a los resultados de dichas instancias, es decir, a los contenidos sustantivos de los fallos legislativos.** La consideración que justificaría la incorporación de este segundo orden de requerimientos, de índole sustantiva, es que los requerimientos meramente procedimentales no constituyen filtros y garantías suficientes contra, por ejemplo, la presencia contaminante de sesgos discriminatorios en el contenido de los fallos. En efecto, por más que las instancias legislativas adopten cuidados extremos en la consulta a la diversidad de las fuentes y de los intereses involucrados o afectados, eso no nos asegura contra la eventualidad de que en la etapa final de votación terminen imponiéndose mayorías obstinadas y estrechas de miras, renuentes a tener en cuenta aportes y elementos de juicio que contraríen a sus rígidas convicciones, y de que ello desemboque en el predominio de interpretaciones sectarias o “facciosas” del interés público.

Con todo, **cabe preguntarse si es posible elaborar una “versión sustantiva” de “las garantías del debido proceso”, a partir de la cual podríamos identificar un conjunto de constreñimientos aplicables directamente a los contenidos de los fallos legislativos y aptos para prevenir tales desviaciones sectarias, sin que ello implique incurrir en una violación inexcusable de nuestros más básicos compromisos democráticos.** Y bien, en el marco del libreto federalista y, en particular, en el experimento democrático estadounidense se encuentra la única formulación de esa interpretación sustantiva. La misma consiste en

-a) definir tales constreñimientos como asociados a la inviolabilidad de aquellas libertades y derechos que se atribuyen por igual a todos los miembros de una comunidad democrática como corolario del reconocimiento de su dignidad en cuanto agentes morales;

-b) otorgar una autoridad institucional de rango superior a la que exhiben los fallos legislativos a un conjunto de principios básicos que especifican las libertades y derechos inviolables, lo cual es posible mediante su inscripción en disposiciones estatutarias de rango constitucional;

-c) autorizar a una instancia judicial especialmente acondicionada a detectar en los fallos legislativos las ocasionales desviaciones a esos principios básicos y a declarar nulos dichos fallos como incompatibles con los compromisos democráticos asumidos;

Lo cierto es que como respuesta al problema que pretende resolver, esta reformulación ambiciosa de las garantías del debido proceso adolece de una deficiencia insubsanable. En efecto, en el marco de las instituciones democráticas, la única manera de determinar el contenido y los alcances de aquellos principios que especifican el conjunto de libertades y derechos inviolables es a través de una instancia de deliberación y de decisión en la que, al igual que la instancia legislativa, todos los ciudadanos tienen iguales oportunidades de incidir. Y como es obvio, **esa instancia constitucional de especificación de las libertades y de los derechos inviolables está expuesta a las mismas desviaciones y propensiones que la instancia legislativa**, por lo que nada garantiza que las sucesivas revisiones del estatuto constitucional no terminen auspicando aquellas mismas desviaciones sectarias y facciosas a las que dicho estatuto estaba encargado de detectar y anular.

-5.8.4. A primera vista, pues, el tercer modelo de adjudicación rawlsiano –“imperfect procedural justice”- tampoco ofrecería pistas rendidoras para responder al problema de la legitimación de la autoridad normativa de los fallos democráticos, en particular, de su modalidad paradigmática: los fallos legislativos. Con todo, al igual que ocurre en relación a los dos primeros modelos examinados, también aquí podemos extraer enseñanzas y sugerencias a partir de ese mismo fracaso parcial, como tendremos oportunidad de comprobar más adelante, en la segunda parte, dedicada a esbozar nuestra propuesta alternativa de legitimación.

De cualquiera manera, es preciso reconocer que las dos propuestas de reformular “las garantías del debido proceso” a fin de aplicarlas a la instancia legislativa y a sus fallos no introducen recursos conceptuales que ya no estuvieran incluidos, al menos en términos generales, en las dos estrategias básicas de justificación de la autoridad de las instituciones y prácticas democráticas, tal como fueron analizadas en 5.3. y en 5.4. En efecto, mientras que la primera propuesta, basada en determinados constreñimientos sintácticos o procedimentales se incluye como una de las variantes posibles de aquellas estrategias generales de justificación que apelan a valores o méritos intrínsecos a las propias prácticas democráticas, la segunda, en cambio, basada en ciertos constreñimientos semánticos o sustantivos se ubica como una de las variantes posibles de aquellas otras estrategias de justificación que apelan a valores extrínsecos a las prácticas democráticas.

En ese sentido, resulta sumamente sugerente que las dos principales propuestas interpretativas de “las garantías del debido proceso” se asocien a dos de las tres dimensiones analíticamente distinguibles de las prácticas lingüísticas, la sintaxis y la semántica. Precisamente, el fracaso de ambas propuestas sugiere la posibilidad de una tercera interpretación alternativa que se asocie la dimensión restante, a la pragmática, podría rescatar los aciertos parciales de las dos primeras propuestas y reformular sus constreñimientos sintácticos y semánticos en términos de constreñimientos pragmáticos.

-6. LA FRATERNIDAD CIVICA Y LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA RAZON PÚBLICA.

-HABERMAS, RORTY Y RAWLS.

-HABERMAS.

-LA CRITICA DE RORTY Y DE BRANDON

-LAS SITTlichkeit Y LOS IMPERATIVOS DE LA IMPARCIALIDAD.

-LAS LIMITACIONES DE ESE IDEAL MORAL. LA IMPARCIALIDAD DEJA AFUERA LA SUSTANCIA DE LA VIDA MORAL Y NO ES CAPAZ DE CONSTRUIR UNA FRATERNIDAD CIVICA.

-LA RELEVANCIA DE LAS RESPUESTAS Y DISPOSICIONES ASOCIADAS, RAÍCES PROFUNDAS E INAGOTABLES.

RORTY

MALA Y APRESURADA LECTURA DE DAVIDSON.

-PISTAS Y TRADUCCIONES INCOMPLETAS PERO RESPUESTAS Y DISPOSICIONES REVISABLES.

RAWLS Y EL OVERLAPPING CONSENSUS.

LAS LIMITACIONES DE LA RAZÓN PÚBLICA.

-PISTA UNICA Y ESTATUTO BASICO. LA PROLONGACIÓN FILOSÓFICA DEL LIBRETO FEDERALISTA.

-LA CRITICA DE JEAN HAMPTON.

-EL ANUNCIO DE UNA ALTERNATIVA MÁS FIEL A DAVIDSON Y BASADA EN BRANDOM.

SEGUNDA PARTE: ALGUNAS PROPUESTAS ALTERNATIVAS A MODO DE RESPUESTA INICIAL A LOS DESAFÍOS PLANTEADOS